

**UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL  
AUDITORÍA UNIVERSITARIA  
INFORME DE AUDITORÍA AU-14-2022**

**INFORME DE GESTIÓN  
SEGUIMIENTO A SERVICIOS PREVENTIVOS BRINDADOS RELATIVOS A LA GESTIÓN DE  
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DIGITAL UNIFICADO DE COMPRAS PÚBLICAS Y AL  
INFORME EMITIDO POR LA COMISIÓN PARA MEJORA CONTINUA EN LA  
PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL**

**ALAJUELA**

**DICIEMBRE, 2022**

## ÍNDICE DE CONTENIDO

<b>RESUMEN EJECUTIVO .....</b>	<b>4</b>
<b>1. INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>6</b>
1.1. Origen del estudio .....	6
1.2. Objetivos .....	7
1.3. Alcance del estudio .....	7
1.4. Limitaciones .....	8
1.5. Antecedentes .....	8
1.6. Marco referente y metodología aplicada.....	10
1.7. Generalidades acerca de la auditoría .....	11
<b>2. RESULTADOS .....</b>	<b>14</b>
2.1 CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA UTN .....	14
2.1.1 Tipos de procedimientos de contratación.....	15
2.1.2 Oportunidades de mejora en el proceso de consolidación de necesidades .....	19
2.1.3 Pagos realizados por concepto de contrataciones públicas .....	22
2.1.4 Control de bienes almacenados.....	27
2.1.5 Programa de adquisiciones .....	30
2.2 RECOMENDACIONES DEL INFORME DE LA COMISIÓN PARA MEJORA CONTINUA EN LA PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL .....	31
2.3 DE LA CARTA DE ADVERTENCIA AU-335-2019 Y DE LA ASESORÍA AU-349-202137	
2.4 OTROS ELEMENTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACIÓN PÚBLICA .....	39
2.4.1 Expedientes de contrataciones anteriores .....	40
2.4.2 Causales de sanción a funcionarios públicos.....	41
<b>3. CONCLUSIONES .....</b>	<b>42</b>
<b>4. ANEXOS .....</b>	<b>47</b>
<b>ANEXO 1 .....</b>	<b>47</b>
<b>ANEXO 2 .....</b>	<b>48</b>
<b>ANEXO 3 .....</b>	<b>49</b>

### INDICE DE FIGURAS

Figura 1 Distribución de frecuencia relativa de los procedimientos de contratación en la UTN, según tipo de procedimiento de contratación, 2018 – 2022.....	16
Figura 2 Distribución de frecuencia relativa de los procedimientos de contratación directa, UTN - Promedio Universidades Públicas – Promedio del Sector Público, 2018 –2022 .....	17
Figura 3 Distribución por subpartidas de los procedimientos de contratación realizados por la UTN, 2019-2022.....	20
Figura 4 Distribución de frecuencia relativa de los pagos realizados por procedimientos de contratación pública, en relación con el presupuesto ejecutado (sin la partida de Remuneraciones), 2019-2022 .....	23
Figura 5 Distribución de frecuencia relativa de los pagos realizados por procedimientos de contratación administrativa en relación con el presupuesto ejecutado (sin la partida de Remuneraciones), 2019-2022 (escenario supuesto para el 2022).....	24
Figura 6 Elementos señalados en el Informe de la Comisión para mejora continua en la Proveeduría Institucional.....	32

**RESUMEN EJECUTIVO**  
**INFORME DE AUDITORÍA AU-14-2022**  
**INFORME DE GESTIÓN**  
**SEGUIMIENTO A SERVICIOS PREVENTIVOS BRINDADOS RELATIVOS A LA GESTIÓN DE**  
**IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DIGITAL UNIFICADO DE COMPRAS PÚBLICAS Y AL**  
**INFORME EMITIDO POR LA COMISIÓN PARA MEJORA CONTINUA EN LA**  
**PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL**

**¿Qué examinamos?**

Las acciones ejecutadas por la Universidad Técnica Nacional (UTN) para acatar las recomendaciones incorporadas en el Informe<sup>1</sup> de la Comisión para mejora continua en la Proveeduría Institucional, así como las sugerencias de la carta de Advertencia AU-335-2019 y la Asesoría AU-349-2021, emitidas por la Auditoría Universitaria. Además, se efectúa un análisis de elementos relacionados con procedimientos de contratación pública realizados por la UTN, con el propósito de brindar insumos que permitan el mejoramiento de la gestión de las compras públicas en la Universidad.

**¿Por qué es importante?**

La contratación pública es uno de los motores que permite el cumplimiento de los objetivos institucionales, pues a través de ella se pueden adquirir los bienes, obras y servicios requeridos para llevar a cabo la labor sustantiva de la Universidad; por lo que es trascendental una adecuada y robustecida gestión de las compras públicas, para contribuir a generar valor público, con el mejor aprovechamiento de los recursos y en acatamiento del ordenamiento jurídico y técnico existente, a fin de generar un impacto positivo en la población meta y, de forma colateral, en el devenir del país.

---

<sup>1</sup> Este Informe es conocido por el Consejo Universitario en la Sesión Ordinaria N. 8-2021 de dicho órgano colegiado, celebrada el 25 de marzo de 2021. Mediante el Acuerdo 13-8-2021 de la citada Sesión, el Consejo instruye a la Dirección General de Administración Universitaria y a la Dirección de Proveeduría Institucional en implementar cada una de las recomendaciones contenidas en el Informe.

### ¿Qué encontramos?

La UTN ha realizado esfuerzos para mejorar la gestión de compras públicas, sin embargo, existe un amplio camino por recorrer en esta temática, pues las recomendaciones del Informe de la Comisión para mejora continua en la Proveeduría Institucional y sugerencias de la Auditoría Universitaria, no han sido acatadas completamente. Además, se debe fortalecer el proceso de consolidación de necesidades que presentan las unidades solicitantes, ampliar el conocimiento y su correspondiente aplicación en cuanto a los tipos y modalidades de contratación, con el fin de utilizar las que sean más convenientes para el cumplimiento de los objetivos institucionales, siempre en acatamiento al bloque de legalidad, conscientes de que los recursos utilizados son recursos públicos y que una representativa porción del presupuesto (miles de millones de colones) se destina a esta finalidad, por lo que deben administrarse con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente.

### ¿Qué sigue?

Se sugiere a la administración activa de la UTN, considerar los aportes suministrados en este Informe, de manera que se tomen las medidas requeridas y se establezcan los controles pertinentes, con el propósito de fortalecer la gestión de compras públicas en la Universidad y contribuir al cabal cumplimiento de los objetivos institucionales, con el mayor aprovechamiento de los recursos, coadyuvando a la sostenibilidad financiera y generando valor a la sociedad, con excelencia, transparencia, innovación, integridad y resiliencia<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Pan Institucional de Desarrollo Estratégico 2022-2026, 4.3 Valores.

**INFORME DE AUDITORÍA AU-14-2022****INFORME DE GESTIÓN****SEGUIMIENTO A SERVICIOS PREVENTIVOS BRINDADOS<sup>3</sup> RELATIVOS A LA GESTIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DIGITAL UNIFICADO DE COMPRAS PÚBLICAS Y AL INFORME EMITIDO POR LA COMISIÓN PARA MEJORA CONTINUA EN LA PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL***Referencia:*

*Informe de Auditoría AU-14-2022, remitido mediante cartas AU-468-2022, AU-469-2022, AU-470-2022 y AU-471-2022 al Consejo Universitario, al Rector, al Director General de la Administración Universitaria y el Director de Proveeduría Institucional, todas del 07 de diciembre de 2022.*

**1. INTRODUCCIÓN****1.1. Origen del estudio**

La presente labor sustantiva, se realiza en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Universitaria de 2022. Conforme con el Plan Institucional de Desarrollo Estratégico 2022-2026 (PIDE) de la Universidad Técnica Nacional (UTN), esta labor de auditoría se encuentra delimitada para apoyar el eje transversal Gestión y Sostenibilidad, específicamente la “*Política para la modernización de la gestión para el cumplimiento de los objetivos institucionales*” y el objetivo estratégico de “*Establecer estrategias que permitan la modernización de la gestión, para el fortalecimiento del capital humano, la transparencia universitaria, la simplificación de trámites, la eficiencia y la eficacia de todas las instancias de la Universidad*” y atender los siguientes elementos o temas que integran el alcance del eje: Digitalización y sistematización de datos y procesos, Gestión ambiental institucional, Sostenibilidad financiera, Optimización y estandarización de normativa y procesos administrativos.

---

<sup>3</sup> Advertencia AU-335-2019 del 25 de junio 2019 “*Advertencia relativa a la gestión de implementación del Sistema Digital Unificado de Compras Públicas*”, y Asesoría AU-302-2021 del 31 de agosto de 2021 (dirigida a la Contraloría General de la República) y AU-349-2021 del 4 de octubre de 2021: “*Comunicación de resultados referentes a la aplicación de la herramienta para el seguimiento de la gestión pública sobre el uso del SICOP en las instituciones públicas*” (dirigida a la Rectoría y a la Dirección de Proveeduría Institucional).

Además, este estudio se realiza en atención al factor estratégico “*Apoyo a la cultura de control interno institucional*”, al programa de sensibilización de control interno al jerarca, Consejos de Sede y titulares subordinados, contenido en los planes de acción del Plan Estratégico de la Auditoría Universitaria 2019 – 2025, y en ocasión de la entrada en vigencia de la Ley General de Contratación Pública, Ley N. 9986, a partir del 1 de diciembre de 2022<sup>4</sup>.

## 1.2. Objetivos

Los objetivos del estudio para el desarrollo en la labor sustantiva, son los siguientes:

- a) Determinar el estado o grado de cumplimiento que presenta la Administración Activa para las recomendaciones del Informe de la Comisión para Mejora Continua en la Proveeduría y las sugerencias de la carta de Advertencia AU-335-2019 y la Asesoría AU-302-2021<sup>5</sup> y AU-349-2021, de acuerdo con la evidencia obtenida.
- b) Informar a la Administración Activa sobre el estado de ejecución o cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión de Mejora Continua en la Proveeduría y las sugerencias emitidas por la Auditoría Universitaria, conforme con lo dispuesto.

## 1.3. Alcance del estudio

El alcance del estudio abarca la verificación del avance de las acciones realizadas por la Administración en relación con el acatamiento de las recomendaciones incorporadas en el Informe de la Comisión para Mejora Continua en la Proveeduría Institucional, así como de las sugerencias de la carta de Advertencia AU-335-2019 y la Asesoría AU-302-2021 y AU-349-2021. La labor abarca los periodos 2019 – 2022<sup>6</sup>, ampliándose en los casos que se consideró necesario.

<sup>4</sup> En anteriores labores de auditoría se ha tratado la temática de la entrada en vigencia de la Ley N. 9986: carta AU-349-2021 del 4 de octubre de 2021, dirigida al Dr. Emmanuel González Alvarado, Rector y al Lic. Florindo Arias Salazar, Director de la Dirección de Proveeduría Institucional (DPI); carta AU-130-2022 del 24 de marzo de 2022: “*Asesoría relativa a los Resultados obtenidos producto de la aplicación de la herramienta para determinar el nivel de preparación institucional para la implementación del nuevo modelo de gestión de compras públicas*”, dirigida a los miembros del Consejo Universitario, al Rector de la UTN y al Director de la DPI.

<sup>5</sup> Por medio de la carta AU-302-2021 del 31 de agosto de 2021 se remite a la Contraloría General de la República, los resultados obtenidos en relación con la aplicación de la herramienta para el seguimiento de la gestión pública sobre el uso del SICOP en las instituciones públicas. Mediante la carta AU-349-2021 del 4 de octubre de 2021, se comunican dichos resultados al Dr. Emmanuel González Alvarado, Rector y al Lic. Florindo Arias Salazar, Director de la Dirección de Proveeduría Institucional.

<sup>6</sup> Por la fecha programada de finalización de la labor, no resulta posible incluir el periodo 2022 de forma completa.

#### 1.4. Limitaciones

Se dan retrasos en el suministro de información de parte de algunas de las instancias a las que se realizan solicitudes por parte de la Auditoría Universitaria, situación que genera reprocesos y retrasos que pueden incidir en la oportunidad de la emisión del presente producto de auditoría.

#### 1.5. Antecedentes

Mediante carta DPU-090-2021<sup>7</sup> del 18 de marzo de 2021, el Director a.i. de la Dirección de Planificación Universitaria traslada al Presidente del Consejo Universitario el Informe de la Comisión para mejora continua en la Proveeduría Institucional. En el Informe de referencia, la citada comisión realiza 13 recomendaciones, relacionadas con los siguientes puntos:

- 1) Organigrama de la Dirección de Proveeduría Institucional
- 2) Reglamento de la Dirección de Proveeduría Institucional
- 3) Interfaces entre AVATAR y SICOP
- 4) Carencia de análisis SICOP con los procedimientos de la Proveeduría Institucional
- 5) No se tienen flujogramas actuales
- 6) No se tiene un sistema que desglose la composición de gasto por partidas
- 7) No se tiene identificados los usuarios según su volumen o complejidad de requerimientos
- 8) No se tiene un sistema que brinde información determinante sobre los procesos que lleva a cabo la Proveeduría Institucional.
- 9) Ausencia de políticas para definir las compras anuales
- 10) Sistema de Compras
- 11) Evaluación por contar con personal de proveeduría en cada sede o bien por áreas funcionales
- 12) De la falta de capacitación en los procesos de adquisiciones a nivel institucional
- 13) De la ausencia de normativa para regular las compras menores, imprevistas y urgentes

---

<sup>7</sup> Carta suscrita por el Lic. Alexander Rodríguez Quesada, Director a.i. de la Dirección de Planificación Universitaria, dirigida al Dr. Emmanuel González Alvarado, Rector y Presidente del Consejo Universitario de la UTN.



Por medio del Acuerdo 13-8-2021 de la Sesión Ordinaria N. 8-2021 del Consejo Universitario, celebrada el 25 de marzo de 2021, el órgano colegiado conoce y da por recibido el Informe supra citado. Además, acuerda:

Instruir a la Dirección General de Administración Universitaria en coordinación con la Dirección de Proveeduría Institucional en implementar cada una de las recomendaciones contenidas en el informe referido, esto dentro de los plazos que el documento indica, tomando en cuenta cada uno de los procedimientos encomendados y observaciones realizadas por la Comisión para Mejora Continua en la Proveeduría.

Por otro lado, mediante carta AU-335-2019, la Auditoría Universitaria remite al anterior Rector y Presidente<sup>8</sup> del Consejo Universitario la Advertencia relativa a la gestión de implementación del Sistema Digital Unificado de Compras Públicas, con la que se advierte sobre riesgos de no utilizar el sistema de compras públicas, pues casi dos años después de la firma del contrato (en el 2017), la UTN no lo había utilizado, pese a que ya había realizado la erogación de recursos para dicho uso.

En relación con lo anterior, en el 2021 se emite la carta AU-349-2021<sup>9</sup>, con la que se brinda la comunicación de resultados referentes a la aplicación de la herramienta para el seguimiento de la gestión pública sobre el uso del SICOP<sup>10</sup> en las instituciones públicas<sup>11</sup>, en la que se determina, como punto positivo, que durante el 2021 la UTN realiza sus procesos de contratación pública mediante dicho sistema.

Por otra parte, el 27 de mayo de 2021 se aprueba la Ley General de Contratación Pública, Ley N. 9986, la cual rige a partir del 1 de diciembre de 2022, lo que implica la derogación<sup>12</sup> de la Ley de Contratación Administrativa, Ley N. 7494.

<sup>8</sup> Carta de fecha 25 de junio de 2019, dirigida al Lic. Marcelo Prieto Jiménez.

<sup>9</sup> Carta de fecha 4 de octubre de 2021, dirigida al Dr. Emmanuel González Alvarado, Rector y al Lic. Florindo Arias Salazar, Director de la DPI.

<sup>10</sup> Sistema Integrado de Compras Públicas.

<sup>11</sup> Labor realizada en coordinación con la Contraloría General de la República.

<sup>12</sup> Cabe destacar que, en el Transitorio I de la Ley N. 9986, se establece: "Los procedimientos de contratación y contratos iniciados, antes de la vigencia de esta ley, se concluirán conforme a las disposiciones vigentes en el momento de adoptarse la decisión inicial del concurso."

Referente a lo anterior, por medio de la carta AU-349-2021 se le indica al Rector y al Director de la DPI, la importancia que se efectúen las gestiones pertinentes con el objetivo de que la UTN se encuentre preparada para aplicar esa normativa a partir de su fecha de rige.

Además, con carta AU-130-2022<sup>13</sup>, se remite la Asesoría relativa a los Resultados obtenidos producto de la aplicación de la herramienta para determinar el nivel de preparación institucional para la implementación del nuevo modelo de gestión de compras públicas, por medio de la cual se comunican los resultados de una labor efectuada en coordinación con la CGR, en la que se determina que la UTN se encuentra en un nivel de preparación inicial, por lo que se agrega la relevancia de efectuar esfuerzos importantes, con el propósito de que al 1 de diciembre de 2022 la Universidad se encuentre preparada para los cambios que representa la Ley N. 9986, cambios que, por supuesto, implican la participación e involucramiento de los diferentes niveles institucionales, con el liderazgo y dirección de las autoridades superiores.

### **1.6. Marco referente y metodología aplicada**

Este estudio se realiza conforme a las potestades dadas a la Auditoría Universitaria, según lo dispuesto en el inciso d) del artículo 22 de la Ley General de Control Interno, Ley N. 8292; el inciso a) del artículo 52 del Estatuto Orgánico de la Universidad Técnica Nacional; el artículo 22 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Universitaria y lo dispuesto en el literal 1.1.4 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, emitidas por la Contraloría General de la República (CGR).

Como criterio fundamental para la realización de esta labor de auditoría, se utiliza la Ley General de Control Interno, Ley N. 8292; las Normas de Control Interno para el Sector Público, emitidas por la Contraloría General de la República; las regulaciones universitarias y aquella jurisprudencia, normativa legal y técnica aplicable.

Para el desarrollo de la presente labor, se utilizan técnicas de auditoría; se realizan entrevistas tanto a personal de la UTN como a funcionarios de otras instituciones públicas, con la intención

---

<sup>13</sup> Carta de fecha 24 de marzo de 2022, dirigida a los miembros del Consejo Universitario, al Rector de la UTN y al Director de la DPI.

de ampliar el panorama sobre el objeto de estudio; se realizan solicitudes de información. Además, se hace uso del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), así como de los sistemas de la CGR: Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) y Sistema Integrado de Actividad Contractual (SIAC).

### 1.7. Generalidades acerca de la auditoría

La educación es un derecho y el Estado tiene la obligación de procurar ofrecerla en la forma más amplia y adecuada<sup>14</sup>, pues esta permite la movilidad social, el desarrollo de la persona y promueve insumos para salir de la pobreza<sup>15</sup>, formar ciudadanos para una democracia en que se concilien los intereses del individuo con los de la comunidad, entre muchos otros beneficios.

En línea con lo anterior, las instituciones de educación superior universitaria estatal, se encuentran facultadas, desde su ámbito de acción, para brindar aportes que provean beneficios en sus estudiantes, familias, comunidades y el país en general.

La Universidad Técnica Nacional (UTN) es una de esas instituciones, cuya razón de ser es dar atención a las necesidades de formación técnica que requiere el país, en todos los niveles de educación superior; para lo cual se debe centrar en temas científicos y tecnológicos, así como en la innovación como elemento fundamental para el desarrollo humano. Dentro de sus fines<sup>16</sup>, se encuentran los siguientes:

b) Ofrecer, a sus estudiantes, una educación integral que les garantice simultáneamente su óptima formación profesional y técnica...

c) Promover la investigación científica de alto nivel técnico y académico, para contribuir tanto al mejoramiento de la vida social, cultural, política y económica del país... y para coadyuvar en los procesos de desarrollo, modernización y mejoramiento técnico de los sectores productivos, las empresas exportadoras y, especialmente, las pequeñas y medianas empresas.

d) Preparar profesionales de nivel superior, por medio de carreras universitarias que guarden armonía con los requerimientos científicos y tecnológicos del desarrollo mundial y las necesidades del país, que culminen

<sup>14</sup> Ley Fundamental de Educación, Ley N. 2160, artículo 1.

<sup>15</sup> Objetivos de Desarrollo Sostenible, Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, disponible en el enlace: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/>.

<sup>16</sup> Ley Orgánica de la Universidad Técnica Nacional, Ley N. 8638, artículos 1 y 4.

con la obtención de títulos y grados universitarios, dando énfasis especial a las carreras técnicas que demanda el desarrollo nacional.

Aunado a lo anterior, tiene, entre otras, las siguientes funciones y atribuciones<sup>17</sup>:

- a) Desarrollar programas académicos de docencia, investigación y extensión en todos los campos.
- b) Preparar profesionales e investigadores de nivel superior en el ámbito del desarrollo técnico que demanda el país.
- c) Llevar a cabo programas de extensión cultural y artística dirigidos a la población costarricense.
- k) Fomentar la transferencia de resultados de investigaciones científicas y tecnológicas, nacionales y extranjeras, al sistema productivo nacional y promover el emprendimiento a partir de la investigación; para lograrlo desarrollará la capacidad científica de generar prototipos y productos que contribuyan a generar nuevas empresas.

Es importante destacar que, toda actividad de los entes públicos y, por consiguiente, la UTN no es ajena a ella, debe sujetarse a los principios fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios. Por esta razón, los servidores públicos deben desempeñar y orientar sus funciones de modo que satisfagan primordialmente el interés público, el cual será considerado como la expresión de los intereses individuales coincidentes de los administrados<sup>18</sup>.

En cumplimiento de lo anterior, es fundamental identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente<sup>19</sup>.

<sup>17</sup> Ley N. 8638, artículo 5.

<sup>18</sup> Ley General de la Administración Pública, Ley N. 6227, artículos 4 y 113.

<sup>19</sup> Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley N. 8422, artículo 3.

En acatamiento de lo comentado, resulta de interés la generación de valor público, el cual se define como “... *la capacidad del Estado para dar respuesta a problemas relevantes de la población en el marco del desarrollo sostenible, ofreciendo bienes y servicios eficientes, de calidad e inclusivos, promoviendo oportunidades, dentro de un contexto democrático*”<sup>20</sup>.

El Manual de Planificación con enfoque para resultados en el desarrollo: Marco Teórico y Práctico, del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, indica: “...*el valor público se relaciona con: Atender los principales problemas para la población afectada. Generar nuevas oportunidades para las generaciones actuales y futuras...*”, y añade:

**La generación de valor público es la clave para legitimar la acción de gobierno y del Estado**, pues permite atraer recursos para poder realizar inversiones y así atender las necesidades de la población que son crecientes. La legitimidad institucional está asociada en el cómo se responda a las necesidades de las personas, en la forma en que se rinda cuentas sobre el uso de los recursos y el alcance de metas, **pero sobre todo en la manera en que las personas expresan su satisfacción con los bienes o servicios recibidos o lo que puede denominarse valor percibido**. (El subrayado y el Estilo de Fuente Negrita no corresponden al original).

En relación con lo comentado, se debe destacar que, la contratación pública es un: “...*medio principal para ejecutar políticas gubernamentales y cumplir objetivos estratégicos nacionales. Los mercados de contratación pública que funcionan adecuadamente incrementan la competitividad nacional ya que mejoran las cuentas públicas, las inversiones (p. ej., infraestructuras) y la calidad de los servicios...*”<sup>21</sup>.

Por su parte, la Contraloría General de la República indica<sup>22</sup> que las compras públicas “... *cumplen un papel fundamental para que las instituciones lleven a cabo sus actividades y den cumplimiento a sus objetivos, en procura de la satisfacción del interés general creando valor*”

<sup>20</sup> Tomado del Manual de Planificación con enfoque para resultados en el desarrollo: Marco Teórico y Práctico. Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, enlace: <https://www.mideplan.go.cr/node/1540>.

<sup>21</sup> Primera versión del Proyecto de la Ley General de Contratación Pública, tomado del sitio web de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, enlace: <http://www.asamblea.go.cr/SitePages/Inicio.aspx>, ruta: Actividad legislativa, Proyectos, Proyectos de ley, enlace: [http://www.asamblea.go.cr/Centro\\_de\\_informacion/Consultas\\_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx](http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx), Búsqueda por Número de Expediente Legislativo: 21546, Seleccionar, Texto Expediente Original: Descargar; también disponible en página web de la CGR, enlace: <https://sites.google.com/cgr.go.cr/lgcp/inicio>.

<sup>22</sup> Transformación hacia una mayor eficiencia de las compras públicas electrónicas: beneficios y ahorros de la unificación, DFOE-SAF-OS-00003-2019, disponible en el enlace web: [https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs\\_cgr/2020/SIGYD\\_D\\_2020002010.pdf](https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2020/SIGYD_D_2020002010.pdf).

*público para el ciudadano.”. El órgano contralor añade que dichas compras impactan la actividad económica y “... pueden servir como instrumento de política pública por sí mismas. Realizar las adquisiciones de la forma más eficiente posible, podría permitir incluso la liberación de recursos para expandir la cobertura de beneficios públicos especialmente a las poblaciones menos favorecidas.”.*

De lo anterior, además de otros puntos, se desprende la relevancia de enfocar esfuerzos para que la gestión de la contratación pública con el correspondiente proceso de adquisición de bienes, obras y servicios se lleve a cabo de la forma más eficiente y en apego al ordenamiento jurídico y técnico aplicable, pues se constituye en un motor fundamental para que los fines, funciones, objetivos y metas de las Universidad se puedan concretar.

## **2. RESULTADOS**

La labor realizada procura generar insumos para la toma de decisiones en la Universidad, en relación con la gestión de la contratación pública y el correspondiente proceso de adquisición de bienes, servicios y obras. Como parte de esa labor, a continuación, se muestran los resultados alcanzados:

### **2.1 CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA UTN**

La contratación pública es el medio por el que las instituciones realizan la adquisición de los bienes, obras y servicios requeridos, por lo que se convierte en un eje que permite movilizar y llevar a cabo las labores sustantivas en cumplimiento de la finalidad a la cual se avocan las instituciones.

La gestión de contratación pública y el correspondiente proceso de adquisiciones de bienes, obras y servicios en la UTN cuenta con amplias oportunidades de mejora, por lo que a continuación se brindan datos y se realizan comentarios con el propósito de fortalecer este proceso, en la búsqueda de un mejor aprovechamiento de los recursos existentes y contribuir al acatamiento de los objetivos institucionales.

### 2.1.1 Tipos de procedimientos de contratación

Dentro de los procedimientos ordinarios de contratación<sup>23</sup> se encuentran la licitación pública nacional (LN) y la licitación abreviada (LA), además, como parte de las materias excluidas de los procedimientos ordinarios de contratación, se encuentra la contratación directa (CD). Este último corresponde a un procedimiento de excepción, que se realiza bajo las especificaciones que establece la normativa aplicable.

La UTN realiza más de 2.800<sup>24</sup> procedimientos de contratación, durante el periodo 2018-2022. Cabe destacar que, a nivel del Sector Público es la institución número 15 con mayor cantidad de procedimientos de contratación, pese a que en lo referente al monto del presupuesto se encuentra en la posición 42 de las instituciones con presupuesto aprobado<sup>25</sup>.

De los procedimientos llevados a cabo en el periodo citado, en el gráfico siguiente se muestra la distribución de frecuencia relativa<sup>26</sup> correspondiente a cada tipo de procedimiento de contratación:

---

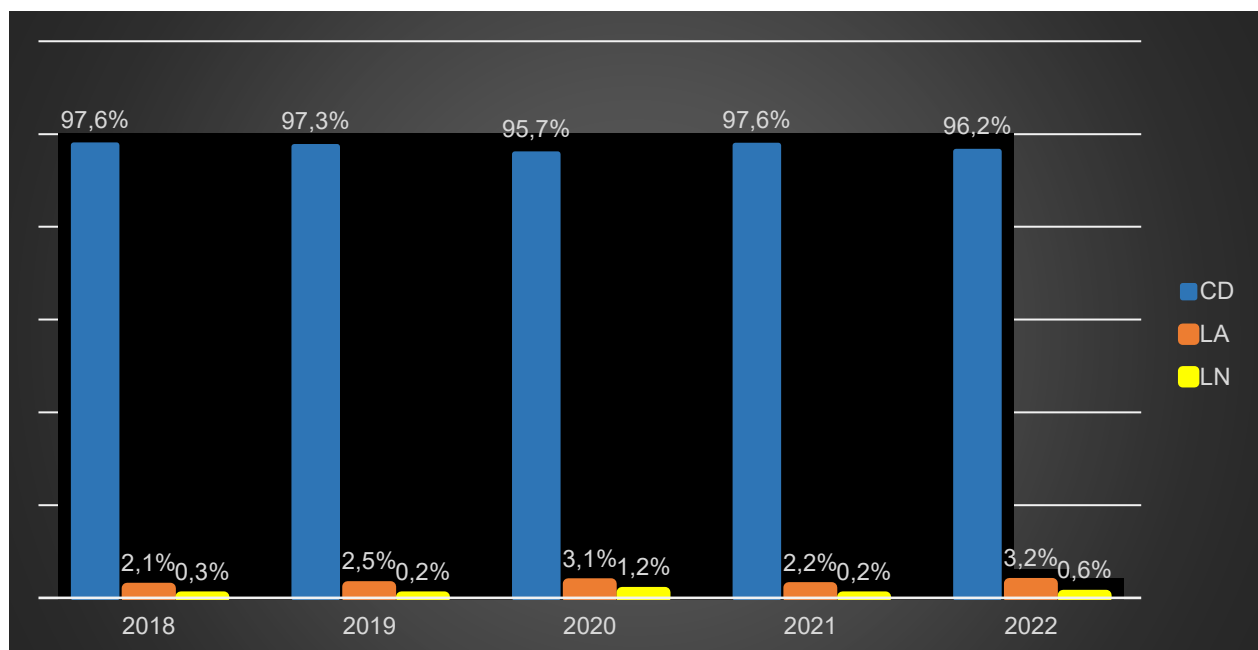
<sup>23</sup> Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo N. 33411. Cabe destacar que, a partir de la entrada en vigencia de la Ley General de Contratación Pública, Ley N. 9986, el 1 de diciembre de 2022, los tipos de procedimientos de contratación varían en su denominación y características.

<sup>24</sup> De acuerdo con datos obtenidos del SIAC de la CGR. Corresponden a los procedimientos de contratación pública iniciados en cada uno de los años del periodo 2018 – 2022. Cabe aclarar que, la fecha de corte para este dato es el 28 de octubre de 2022, fecha en que se obtienen los datos del SIAC de la CGR para esta tabla específica, por lo que no incluye la totalidad de procedimientos de contratación de 2022.

<sup>25</sup> De la sumatoria de los presupuestos iniciales del periodo 2018-2022.

<sup>26</sup> Peso porcentual de cada tipo de procedimiento con respecto a la totalidad de procedimientos realizados.

**Figura 1 Distribución de frecuencia relativa de los procedimientos de contratación en la UTN, según tipo de procedimiento de contratación, 2018 – 2022**



**Fuente:** Elaborado por la Auditoría Universitaria, con base en datos tomados del SIAC de la CGR.

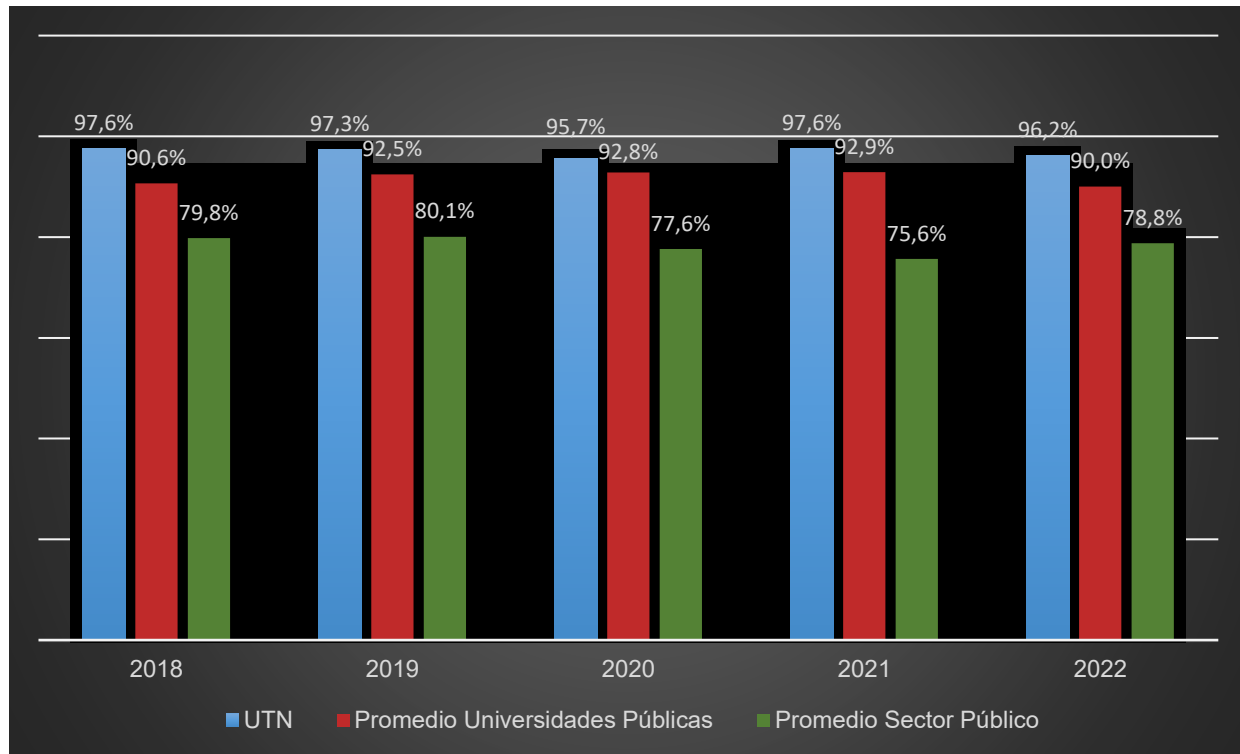
Tal como se observa, durante el periodo 2018-2022, más del 95% de los procedimientos de contratación iniciados en la UTN corresponden a contrataciones directas, que oscilan en dicho periodo entre el 95,7% y el 97,6%, mientras que la sumatoria de los otros tipos de procedimientos, representan menos del 4,5% de la totalidad de los procedimientos de contratación realizados en dicho periodo.

Si se efectúa una comparación de los procedimientos de contratación directa realizados<sup>27</sup> en la UTN, en relación con el promedio de las Universidades Públicas y el promedio del Sector Público, los datos resultantes se muestran en el gráfico siguiente:

<sup>27</sup> Corresponden a los procedimientos de contratación directa iniciados en cada uno de los años del periodo 2018 - 2022.



**Figura 2 Distribución de frecuencia relativa de los procedimientos de contratación directa, UTN - Promedio Universidades Públicas – Promedio del Sector Público, 2018 –2022**



**Fuente:** Elaborado por la Auditoría Universitaria, con base en datos tomados del SIAC de la CGR.

La UTN es la Universidad Pública que, porcentualmente, lleva a cabo más<sup>28</sup> procedimientos de contratación directa, en relación con la totalidad de procedimientos efectuados. Además, tal como se muestra en el gráfico anterior, durante el periodo de referencia se encuentra por encima del promedio de las Universidades Públicas entre el 2,9% y el 7,0% (en promedio un 4,9% de diferencias); mientras que las diferencias con respecto al promedio del Sector Público oscilan entre el 17,2% y el 21,9% (en promedio un 18,5% de diferencias).

Si bien es un procedimiento permitido por el ordenamiento jurídico (previo a la Ley N. 9986), el realizar gran cantidad de procedimientos bajo la figura de contratación directa, puede denotar

<sup>28</sup> Únicamente en el 2021 la Universidad de Costa Rica realiza más procedimientos de contratación directa, en relación con la totalidad de procedimientos de contratación efectuados, pues el 97,8% de sus procedimientos corresponden a contrataciones directas, mientras que la UTN utiliza ese tipo de procedimientos en el 97,6% de los casos.

falencias en la planificación de las adquisiciones, pues una adecuada planificación se encuentra ligada a un oportuno proceso de unificación de los objetos contractuales de igual o similar naturaleza, con la finalidad de evitar fragmentaciones y obtener los bienes, obras y servicios requeridos en el momento y lugar requeridos.

Por otro lado, a mayor cantidad de procedimientos de contratación realizados, se incrementa el riesgo para la institución, pues puede dificultarse el mantener los controles sobre cada uno de ellos. Además, resulta más laborioso, tanto para las unidades solicitantes, como para los funcionarios de la DPI, pues no va a ser lo mismo controlar y llevar el seguimiento de todo lo concerniente a una licitación, con sus posibles recursos, solicitudes por parte de los oferentes o adjudicados, control de plazos de vencimiento, entre otros, que hacerlo con veinte, treinta o más, procedimientos de contratación directa o cualquier tipo de procedimiento de contratación que pueda implicar no haber realizado un adecuado proceso de consolidación y unificación de necesidades, por lo que se genera un desgaste operativo.

Cabe destacar que, la UTN, como casa de enseñanza superior universitaria, cuyo fin es atender las necesidades de formación técnica requeridas por el país a nivel de educación superior, debe ser un ejemplo en la forma de hacer las cosas, por su innovación, mejor aprovechamiento de los recursos, entre otros, tanto para las demás instituciones como para las empresas privadas, sin embargo, las situaciones indicadas evidencian que existen debilidades y amplias oportunidades de mejora que deben ser solventadas con el propósito de fortalecer la gestión de contratación pública y el correspondiente proceso de adquisiciones institucional.

Es importante aclarar que, con la entrada en vigencia de la Ley N. 9986, a partir del 1 de diciembre de 2022, los tipos de procedimientos de contratación varían en sus denominaciones y características, sin embargo, si no se solventan las situaciones identificadas, se seguirían arrastrando prácticas inadecuadas, solamente que con otra normativa y denominación.

Para variar este tipo de situaciones, es fundamental el compromiso superior<sup>29</sup>, de manera que dicho compromiso por parte de las altas autoridades, permee a los demás niveles de la institución,

---

<sup>29</sup> Normas de Control Interno para el Sector Público, norma 2.2. Compromiso Superior.

a fin de que se promueva y fortalezca una cultura de control, que conlleve a beneficiar a los sectores a los cuales la Universidad debe dirigir sus esfuerzos.

### 2.1.2 Oportunidades de mejora en el proceso de consolidación de necesidades

En el periodo 2019 – 2022, la UTN realiza 2.111<sup>30</sup> procedimientos de contratación, que tal como se indica en el punto anterior, dicha cantidad ubican a la UTN dentro de las primeras 15<sup>31</sup> instituciones del país con mayor cantidad de procedimientos realizados.

Al efectuar la clasificación de los procedimientos de contratación realizados, por subpartidas, de acuerdo con el Clasificador por objeto del gasto del Sector Público<sup>32</sup>, considerando el objeto contractual de cada procedimiento, se determina que los 2.111 procedimientos de contratación se clasifican en 70 subpartidas.

De esas 70 subpartidas, hay 44 (ver Anexo 2) que se encuentran presentes en procedimientos de contratación realizados durante cada uno de los cuatro años del periodo 2019-2022. Los concursos incluidos en esas 44 subpartidas representan el 93,1% de la totalidad de los procedimientos de contratación efectuados en el periodo de referencia. Asimismo, hay 8 subpartidas que se encuentran presentes en procedimientos de contratación que se realizan durante tres de los cuatro años que, sumados a las anteriores, resulta en que el 97,0% de los procedimientos de contratación efectuados se clasifican en 52 subpartidas (ver Anexo 3) que, se encuentran presentes, al menos, en tres de los cuatro años citados.

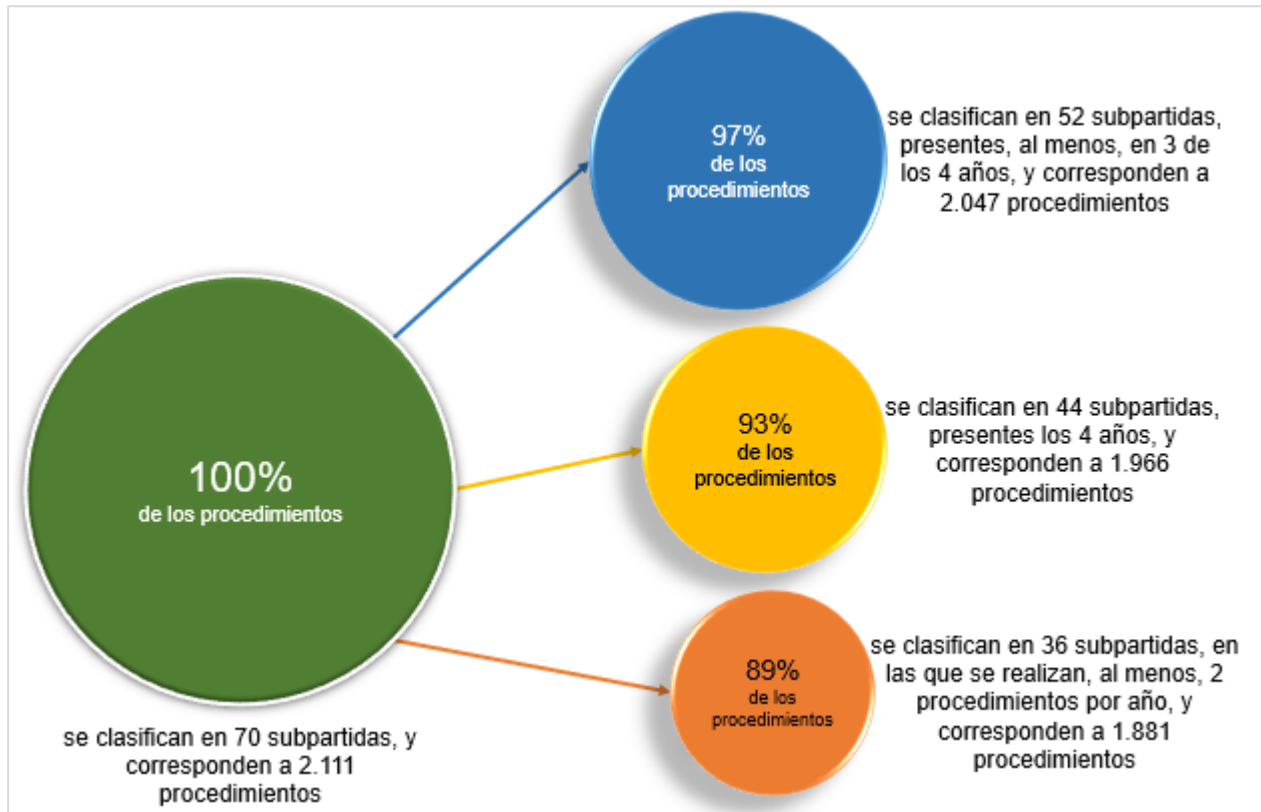
Aunado a lo anterior, se identifica que el 89,1% de los procedimientos de contratación realizados durante el periodo 2019-2022, se encuentran clasificados en 36 subpartidas (ver Anexo 1), para las cuales, al menos, se realizan dos procedimientos de contratación durante cada uno de los años del periodo de referencia. En la figura siguiente, se muestra un resumen de lo comentado:

<sup>30</sup> De acuerdo con datos obtenidos del SIAC de la CGR el 11 de noviembre de 2022. Se refiere a los procedimientos en que se realiza la invitación a concursar en cada uno de los años del periodo 2019 - 2022.

<sup>31</sup> Si se considera el periodo 2019 - 2022, la UTN se ubica en la posición número 14 de las instituciones con mayor cantidad de procedimientos de contratación iniciados.

<sup>32</sup> Clasificador por objeto del gasto del Sector Público, abril 2018, obtenido de la página web del Ministerio de Hacienda, enlace: "<https://www.hacienda.go.cr/>", Presupuesto, Clasificadores Presupuestarios.

**Figura 3 Distribución por subpartidas de los procedimientos de contratación realizados por la UTN, 2019-2022**



Fuente: Elaborado por la Auditoría Universitaria, con base en datos tomados del SIAC de la CGR y del SICOP.

Las situaciones mencionadas denotan que la UTN realiza todos los años procedimientos de contratación por objetos contractuales de igual o similar naturaleza, e incluso se realizan dichos procedimientos en dos o más ocasiones por año<sup>33</sup>.

Por lo anterior, es importante que en la Universidad se realice un adecuado proceso de consolidación<sup>34</sup> de las necesidades de bienes, obras y servicios de las diferentes instancias, para lo cual es fundamental la planificación de todo lo concerniente a la gestión de contratación pública y el proceso de adquisiciones. Sin embargo, <sup>35</sup>si pese a la consolidación de necesidades

<sup>33</sup> Lo anterior, en el 89,1% de los casos del periodo 2019 - 2022.

<sup>34</sup> Ley General de Contratación Pública, Ley N. 9986: artículo 32.

<sup>35</sup> Ley General de Contratación Pública, Ley N. 9986: artículo 31.

convergen circunstancias que podrían tomarse como “imprevistos”, por ejemplo, alguna variación presupuestaria que incide en el Programa de Adquisiciones, esas situaciones pueden solventarse haciendo uso de las diferentes opciones<sup>36</sup> que brinda el ordenamiento jurídico y técnico, considerando siempre la relevancia de mantener los controles correspondientes, así como la participación del ente técnico en materia de contratación pública a nivel de la UTN.

La normativa aplicable<sup>37</sup> en materia de contratación pública, brinda un abanico de posibilidades para que las instituciones realicen sus procedimientos de contratación, dentro de ellos se encuentran los procedimientos con modalidad de entrega según demanda, los convenios marco, las licitaciones con precalificación, la subasta inversa electrónica, entre otros, con los que se busca reducir la cantidad de procedimientos a realizar, aprovechar las economías de escala y, sobre todo, conseguir una mayor eficiencia en las adquisiciones.

La UTN cuenta con algunas contrataciones realizadas bajo la modalidad de entrega según demanda, además, con algunos convenios marco. Se identifica que, dichas contrataciones se encuentran relacionadas con varias de las 36 subpartidas para las que, al menos, se realizan dos procedimientos de contratación por año, sin embargo, para al menos 20 de esas subpartidas no se está aprovechando las bondades normativas, por lo que existen amplias oportunidades de mejora a fin de conseguir eficiencia, eficacia y economía en el ciclo de contratación pública y el proceso de adquisiciones.

Con respecto a lo anterior, es relevante que la Dirección de Proveeduría Institucional establezca formalmente, mantenga, perfeccione y evalúe controles<sup>38</sup> referentes a los periodos de vigencia de los contratos realizados, de manera que conozca con certeza el plazo cierto de finalización de las diferentes contrataciones, con el propósito de que se promuevan los concursos necesarios para continuar con la obtención de los bienes, obras y servicios requeridos.

---

<sup>36</sup> Diferentes modalidades de contratación, por ejemplo: modalidad de entrega según demanda, convenios marco, licitaciones con precalificación, subasta inversa electrónica. Ley General de Contratación Pública, Ley N. 9986, artículos 58, 60, 62, 65, 74 y 84; Reglamento a la Ley General de Contratación Pública, Decreto Ejecutivo N. 43808, artículos 148, 149, 152, 155, 160 al 165, 195, 228.

<sup>37</sup> Ley de Contratación Administrativa. Ley N. 7494 y Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo N. 33411, vigentes hasta el 30 de noviembre de 2022, y de ahí en adelante para aquellos procedimientos de contratación iniciados antes del 1 de diciembre de 2022. Además, la Ley General de Contratación Pública, Ley N. 9986, y Reglamento a la Ley General de Contratación Pública, Decreto Ejecutivo N. 43808, vigentes a partir del 1 de diciembre de 2022.

<sup>38</sup> Ley General de Control Interno, Ley N. 8292: artículo 2, inciso b); artículos 10, 14, 15 y 17. Normas de Control Interno para el Sector Público; normas 1.4, 1.9, 4.3.

Aunado a lo anterior, este tipo de controles y, no solo su establecimiento, sino, sobre todo su aplicación y monitoreo constante<sup>39</sup>, puede contribuir a que se tomen decisiones oportunas para renovar las contrataciones que se encuentran con cierta cercanía a su vencimiento, considerando que efectuar un determinado procedimiento de contratación puede conllevar varios meses, por lo que una sana práctica en materia de control interno requiere que con la anticipación pertinente se comiencen los procedimientos de contratación, a fin de que aquellas contrataciones que se vencen y que la institución requiere continuar con la obtención de esos bienes, obras o servicios, se cuente con los adjudicatarios correspondientes con antelación a que se cumpla la vigencia de las contrataciones. Esta situación también requiere que se establezcan<sup>40</sup> los canales de comunicación necesarios, con el objetivo de que las instancias involucradas dispongan y trasladen la información con oportunidad.

### **2.1.3 Pagos realizados por concepto de contrataciones públicas**

La UTN ha desembolsado alrededor de  $\phi$ 14.476,51 millones<sup>41</sup> por concepto de cancelación de obligaciones adquiridas con los adjudicatarios, en relación con procedimientos de contratación pública, durante el periodo 2019-2022<sup>42</sup>. Al comparar la información de los pagos con el presupuesto institucional ejecutado durante esos años, sin considerar<sup>43</sup> la partida de remuneraciones, resulta que los pagos efectuados por contrataciones realizadas oscilan entre el 24,2% y el 34,2% del presupuesto ejecutado, tal como se muestra en la figura siguiente:

---

<sup>39</sup> Normas de Control Interno para el Sector Público: normas 1.4 y 4.5.1.

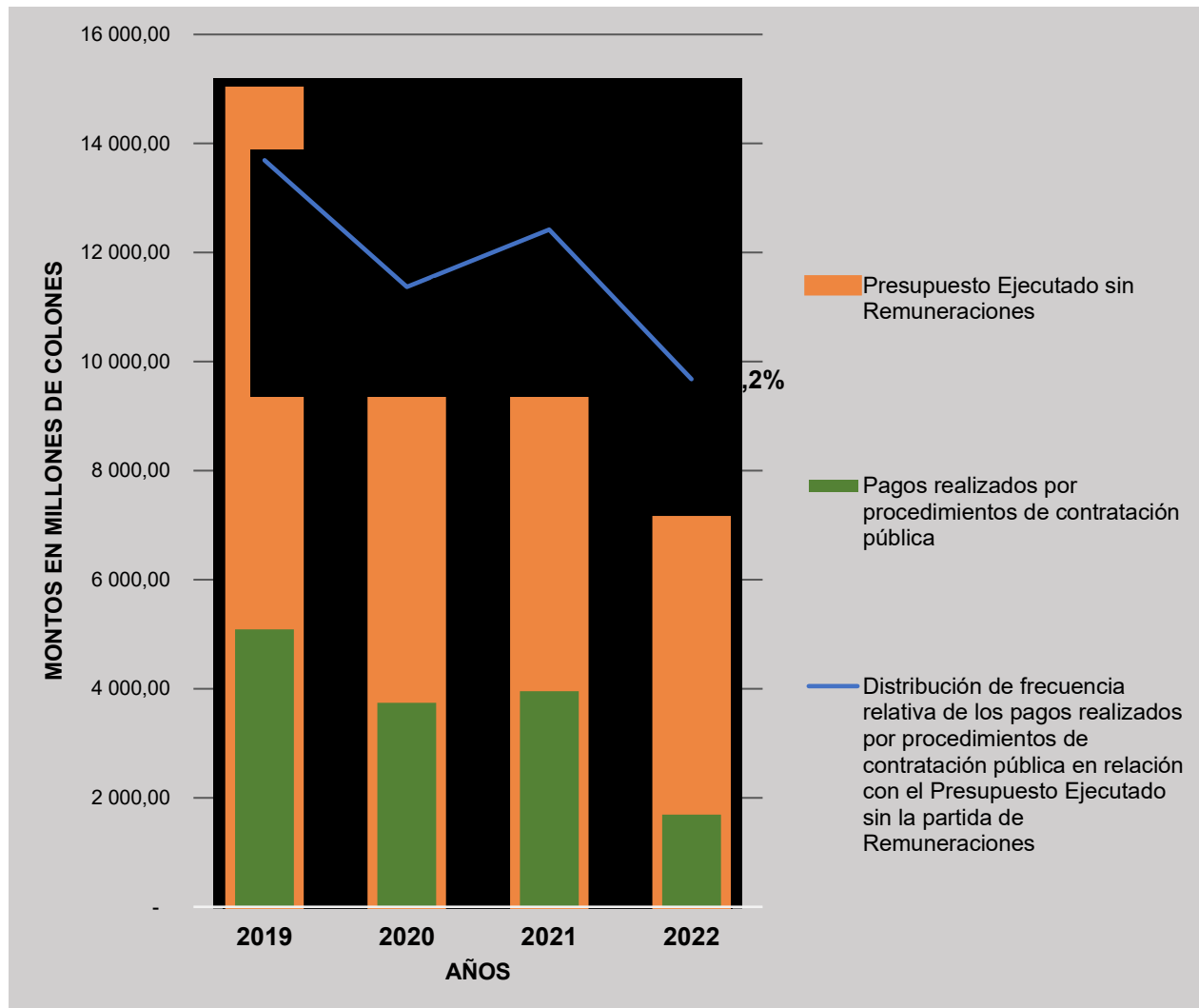
<sup>40</sup> Normas de Control Interno para el Sector Público: normas 1.4, 2.2, 4.2, 5.6 y 5.7.

<sup>41</sup> De acuerdo con información suministrada por el Área de Tesorería de la Dirección de Gestión Financiera.

<sup>42</sup> Los datos de 2022 no incluyen el periodo completo, debido a las fechas de corte de la información y a la fecha programada de finalización de la presente labor de auditoría.

<sup>43</sup> No se considera la partida de remuneraciones debido a que, como parte de esa partida no se desembolsan recursos para pagar los compromisos adquiridos por los procedimientos de contratación pública.

**Figura 4 Distribución de frecuencia relativa de los pagos realizados por procedimientos de contratación pública, en relación con el presupuesto ejecutado (sin la partida de Remuneraciones), 2019-2022**

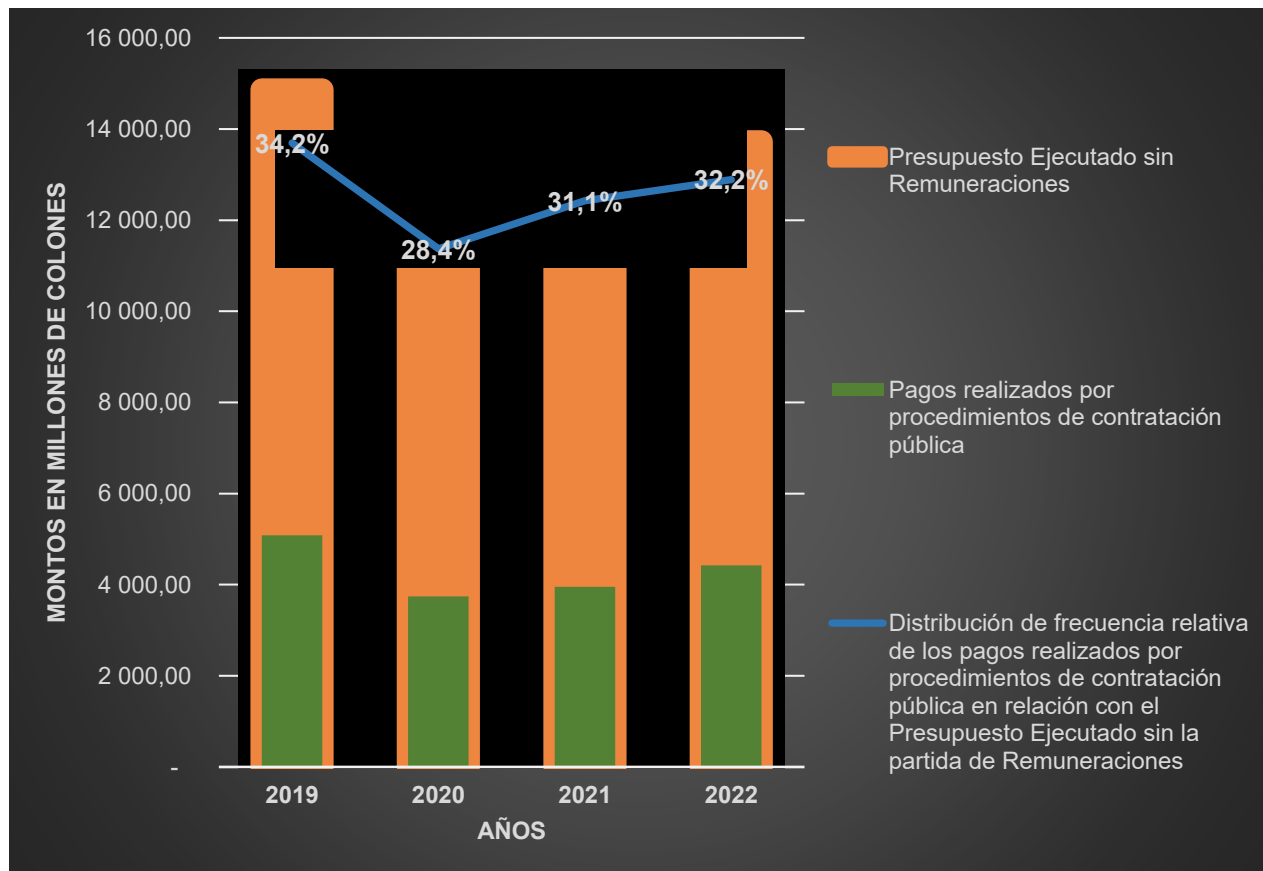


**Fuente:** Elaborado por la Auditoría Universitaria, con base en información tomada del SIPP de la CGR, así como información suministrada por el Área de Tesorería.

Cabe destacar que la información anterior, no incorpora el periodo 2022 completo, pues tanto el presupuesto ejecutado como los datos de los pagos realizados por concepto de contrataciones adjudicadas, muestran lo correspondiente a alrededor de 10 meses del año.

Debido a lo anterior, se realiza un escenario hipotético, en el que, bajo el supuesto de que la UTN va a lograr la ejecución del 100% del presupuesto de egresos, y que va a efectuar pagos a los adjudicatarios de los procedimientos de contratación pública por el 100% de lo indicado en el Programa de Adquisiciones<sup>44</sup>, entonces los datos resultantes variarían, siendo más similares a los años anteriores, tal como se muestra a continuación:

**Figura 5 Distribución de frecuencia relativa de los pagos realizados por procedimientos de contratación administrativa en relación con el presupuesto ejecutado (sin la partida de Remuneraciones), 2019-2022 (escenario supuesto para el 2022)**



**Fuente:** Elaborado por la Auditoría Universitaria, con base en información tomada del SICOP, del SIPP de la CGR, así como información suministrada por el Área de Tesorería.

<sup>44</sup> Modificación #3 al Programa de Adquisiciones de la UTN, incorporado en el SICOP en mediados de noviembre de 2022.



Bajo el supuesto en mención, los pagos efectuados por contrataciones realizadas oscilarían entre el 28,4% y el 34,2% del presupuesto ejecutado, sin considerar la partida de Remuneraciones, durante el periodo de referencia.

Tal como puede observarse en los gráficos anteriores, la UTN realiza pagos a los adjudicatarios por concepto de contrataciones públicas, los cuales corresponden, aproximadamente, entre una cuarta parte y una tercera parte del presupuesto ejecutado, sin considerar Remuneraciones.

Puede constatarse la relevancia que tienen este tipo de pagos en el presupuesto institucional, y aún más, la importancia que enmarca todo lo referente a la contratación pública, pues es el motor que permite la movilización de las diferentes labores universitarias, ya que el equipo, mobiliario y demás, necesario para impartir lecciones, para realizar las prácticas en laboratorios, y todo lo relacionado con la labor sustantiva de la Universidad, toma como insumo los bienes, obras y servicios adquiridos mediante la contratación pública.

De ahí la importancia de dirigir esfuerzos en fortalecer toda la gestión de la contratación pública de la UTN, considerando desde la planificación; el planteamiento de las necesidades, las cuales deben estar alineadas con los planes institucionales y nacionales, todo el proceso previo a la contratación; así como la ejecución; la distribución o entrega y el seguimiento, a fin de identificar si lo adquirido cumple a satisfacción con los requerimientos de los usuarios.

Para lo anterior, es trascendental el apoyo, acompañamiento, liderazgo y visión estratégica de la Dirección de Proveeduría Institucional, como la parte técnica a nivel institucional en el área de contratación pública, de ahí que cobra mayor relevancia que ese personal pueda acceder a capacitación<sup>45</sup> periódica, con la finalidad de conocer las diferentes bondades normativas y poder aplicar esos conocimientos en beneficio de la institución y su población meta.

Sobre este punto, se debe considerar que, como parte de la capacitación, se profundice en el conocimiento de los conceptos técnicos y normativos existentes, para evitar la comisión de errores tanto por parte del personal de la DPI, así como que se incida en que otros funcionarios

---

<sup>45</sup> Ley General de Contratación Pública, Ley N. 9986: artículos 131 y 132. Normas de Control Interno para el Sector Público, norma 2.4.

cometan errores, por desconocimientos o malas interpretaciones del ordenamiento jurídico y técnico.

Cabe destacar que, no solo es necesaria esa capacitación en los funcionarios de la DPI, sino también en todos los servidores que, de una u otra forma, tienen relación con lo referente a la gestión de la contratación pública. Aunado a lo anterior, no solamente se requiere la capacitación, sino también, la aplicación de los conocimientos<sup>46</sup> adquiridos en las labores diarias, caso contrario, los esfuerzos por capacitar serán improductivos y no se estaría acatando lo concerniente a que las labores se cumplan de forma eficiente y eficaz<sup>47</sup>.

En relación con lo comentado, la UTN cuenta con el mandato legal<sup>48</sup> de: *“Desarrollar programas especiales de fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, mediante acciones de asistencia técnica, capacitación y formación integral, para procurar su desarrollo y expansión.”*

La finalidad de dicho mandato, también se encuentra alineada con la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, Ley N. 8262, en razón de fomentar el desarrollo integral de las PYMES para la democratización económica, el desarrollo regional, los encadenamientos entre sectores económicos, así como establecer mejores condiciones institucionales para la creación y operación de esas empresas, entre otros objetivos<sup>49</sup>.

Lo anterior, en la obligación legal que tiene la Administración Pública de desarrollar y fomentar la participación de las PYMES en el sistema de compras públicas<sup>50</sup>, así como al deber legal por parte de las Universidades Estatales de estructurar programas sectoriales para impulsar capacitación, asistencia técnica y otros para las PYMES<sup>51</sup>.

<sup>46</sup> Código de deberes éticos y profesionales de los funcionarios de la Universidad Técnica Nacional: artículos 11, inciso e; artículos 17 y 18.

<sup>47</sup> Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, Ley N. 8422: artículo 3; Ley General de Control Interno, Ley N. 8292: artículo 8.

<sup>48</sup> Ley Orgánica de la Universidad Técnica Nacional, Ley N. 8638, artículo 4. Fines, inciso f).

<sup>49</sup> Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas y sus Reformas, Ley N. 8262, artículo 2, relativo a los objetivos, incisos a) y e).

<sup>50</sup> Ley N. 8262, artículo 20.

<sup>51</sup> Ley N. 8262, artículo 22.

El mandato legal de la UTN también se encuentra alineado con la Ley General de Contratación Pública, la cual demanda de la Administración Pública realizar la actividad contractual de forma estratégica, a través de una política pública tendiente al desarrollo socioeconómico equitativo, tanto a nivel nacional como regional. La concepción de compra pública estratégica reconoce su carácter instrumental, técnico operativo, para que se fomente la participación de las PYMES en el sistema de compras.

Por lo anterior, corresponde a las autoridades universitarias no solo disponer de programas de educación continua para PYMES, sino también, la obligación de brindar el acompañamiento necesario para incorporar estrategias de participación de las PYMES en los procedimientos de contratación pública.

#### **2.1.4 Control de bienes almacenados**

La normativa aplicable establece una serie de labores relacionadas con el control de los inventarios de bienes adquiridos. Así, por ejemplo, le corresponde<sup>52</sup> a la Dirección de Proveeduría Institucional administrar y controlar los bienes almacenados y garantizar su adecuada distribución, además, llevar un inventario permanente de todos sus bienes, en los casos que proceda.

De ahí que reviste vital importancia el establecer, mantener, perfeccionar y evaluar<sup>53</sup> controles por parte de la DPI, en lo referente a los bienes almacenados y su distribución. Es fundamental que esos controles permitan conocer con certeza los bienes que se tienen resguardados, por tipo, cantidad, así como las fechas de vigencia de los diferentes productos; además, conocer las condiciones bajo las cuales debe estar almacenado determinado bien, de forma que no se infrinjan las condiciones de temperatura, luminosidad, cuidado en el manejo y otros, que requieren los bienes para poder mantenerse en óptimas condiciones para su uso en el momento necesario.

---

<sup>52</sup> Ley de Contratación Administrativa, Ley N. 7494: artículo 107; Reglamento Orgánico de la Universidad Técnica Nacional: artículos 56 y 57; Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo N. 33411: artículos 227 y 230; Reglamento de Proveeduría de la Universidad Técnica Nacional: artículos 5, 6, 7 y 14 inciso h).

<sup>53</sup> Ley General de Control Interno, Ley N. 8292: artículo 2, inciso b); artículos 10, 14, 15 y 17. Normas de Control Interno para el Sector Público; normas 1.4, 1.9, 4.3.

La UTN cuenta con almacenes y bodegas en diferentes zonas regionales: Administración Universitaria, Sede de Atenas, Sede del Pacífico, Sede de Guanacaste, Sede de San Carlos. Por lo que, de parte de la administración se deben establecer o bien, perfeccionar controles e infraestructura para contribuir al proceso de almacenamiento de los bienes. Además, es relevante que existan canales y medios de comunicación<sup>54</sup> adecuados, para que las dependencias solicitantes pueden conocer los bienes que están disponibles en los almacenes y bodegas, a fin de no realizar procedimientos de contratación para adquirir lo que se cuenta en existencias, sobre todo si se trata de bienes de uso general, como artículos de limpieza, materiales de oficina, repuestos, accesorios, mercancías para el proceso de producción, u otros de uso común.

Lo anterior, con el objetivo de hacer el mejor uso de los recursos disponibles, y evitar que artículos existentes en los almacenes lleguen a caducar, pues en lugar de acceder a ellos se realicen otros concursos para comprar ese mismo tipo de bienes.

En relación con estos puntos, es importante que la UTN aproveche los almacenes y bodegas existentes, de manera que se puedan establecer en los pliegos de condiciones<sup>55</sup> tópicos básicos, que obliguen a los contratistas a realizar la entrega de lo contratado en el almacén propio de la Sede en que se ubica la unidad solicitante o bien, en el almacén más cercano, en caso de que en la Sede no se cuente con un almacén, incluyendo en el pliego de condiciones la posibilidad de entregas parciales, en aras de contribuir al mayor aprovechamiento de los recursos<sup>56</sup>, así como apoyar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Universidad, dentro de los cuales se encuentra el establecimiento de la gestión ambiental<sup>57</sup> *“... como un eje prioritario para la planificación y el desarrollo de actividades, tanto a nivel interno como externo de la Universidad.”*

De no cumplirse lo anterior, se estaría realizando un inadecuado uso de los recursos, al recibir los bienes en una localidad y, posteriormente, tener que gestionar el traslado a otro lugar, con el agravante de tiempos y utilización de otros recursos, que acrecienta en forma significativa los

<sup>54</sup> Normas de control interno para el Sector Público, norma 5.7.1.

<sup>55</sup> Ley N. 9986, artículos 5, 14 y 40, así como la demás normativa relacionada.

<sup>56</sup> Ley N. 9986, artículo 8, incisos b) y d); artículos 20 y 21.

<sup>57</sup> Plan Institucional de Desarrollo Estratégico 2022-2026, 4.3 Valores: Compromiso, Responsabilidad, Cuidado esencial; 4.5 Objetivos Estratégicos Institucionales, Gestión y Sostenibilidad; Circular R-086-2022 del 13 de octubre de 2022, suscrita por el Dr. Emmanuel González Alvarado, Rector, referente a la Declaratoria CONARE *“Universidades públicas ante el Cambio Climático”*.

costos administrativos, en que se incurriría, pudiendo trasladar esos costos al contratista, de haberse establecido correctamente las condiciones de la contratación.

Además, resulta de interés acotar que, con la entrada en vigencia de normativa como la Ley Fortalecimiento de las finanzas públicas, Ley N. 9635, no se trata de asumir que se debe “*gastar por gastar*”, ni de adquirir bienes u otros, aunque se cuente con existencia en los inventarios de los almacenes y bodegas, con el fin de que no se realicen recortes presupuestarios, pues ese no es el espíritu de la Ley, ni mucho menos se encuentra relacionado con una sana administración de los recursos públicos, cuyo uso debe estar ligado a una adecuada planificación y cada gasto debe ser con el mayor afán de enfocarse al cumplimiento de los objetivos institucionales.

Por lo anterior, cabe indicar que, los funcionarios públicos deben ser muy celosos en sus labores, actuando siempre apegados al principio de legalidad<sup>58</sup>, así como a las mejores prácticas y técnicas, y recordando el deber de probidad<sup>59</sup> que les cobija, y que se deben rendir cuentas por las labores ejercidas, por lo que, una adecuada planificación, se encuentra relacionada con una conveniente y oportuna adquisición de los bienes, obras y servicios requeridos, con la finalidad de contar con los insumos necesarios en el momento oportuno, los cuales debe buscarse que sean bienes, obras y servicios de calidad, con los que se pueda solventar las necesidades de los usuarios y no solamente comprar aquello que sea lo más barato, sin considerar otros elementos muy importantes, como la calidad, el plazo de garantía, entre otros.

Para ello, es relevante la capacitación<sup>60</sup> periódica en temas de contratación pública y la supervisión<sup>61</sup>, con el propósito de que, desde las solicitudes planteadas por las unidades que requieren adquirir un bien, obra o servicio determinado, se tenga claridad de aquellos elementos esenciales que deben cumplir los oferentes para que su oferta sea considerada en la posterior evaluación, entendidos como los requisitos de admisibilidad, de manera que se elabore de forma adecuada el pliego de condiciones<sup>62</sup>, comprendiendo que un requisito de admisibilidad no debe

<sup>58</sup> Constitución Política de la República de Costa Rica, artículo 11; Ley General de la Administración Pública, Ley N. 6227, artículo 11.

<sup>59</sup> Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley N. 8422, artículo 3.

<sup>60</sup> Ley General de Contratación Pública, Ley N. 9986: artículos 131 y 132; Normas de Control Interno para el Sector Público, norma 2.4; Código de deberes éticos y profesionales de los funcionarios de la Universidad Técnica Nacional: artículos 11, inciso e; artículos 17 y 18.

<sup>61</sup> Normas de Control Interno para el Sector Público, norma 4.5.1 Supervisión constante.

<sup>62</sup> Ley N. 9986, artículo 40.

incluirse como parte de los factores de evaluación, caso contrario, se le daría la posibilidad a los oferentes de ser adjudicados, sin cumplir los elementos esenciales que requiere la unidad solicitante para satisfacer correctamente sus necesidades.

En virtud de lo anterior, se debe contar con el apoyo y asesoría de la Dirección de Proveeduría Institucional, como dependencia encargada<sup>63</sup> de los procedimientos de contratación pública a nivel de la UTN, en sus ámbitos estratégico y técnico operativo, en aras de asegurar la adquisición del bien, obra o servicio más conveniente y apegado al principio del valor por el dinero<sup>64</sup>, con entregas justo a tiempo, promoviendo la coordinación y comunicación efectiva, así como el adecuado almacenamiento y distribución posterior de los bienes correspondientes.

### **2.1.5 Programa de adquisiciones**

La normativa establece<sup>65</sup> que, en el primer mes de cada período presupuestario, la Administración dará a conocer el Programa de Adquisiciones proyectado para ese año, el cual debe ser publicado a través del Sistema Digital Unificado, junto con sus posibles modificaciones.

La UTN publica su programa de adquisiciones en el SICOP, sin embargo, no se realiza una evaluación ni seguimiento<sup>66</sup> de dicho programa, con la finalidad de identificar oportunidades de mejora, incluyendo las razones por las cuáles, por ejemplo, no se adquirió determinado bien, obra o servicio. Dicha evaluación puede permitir obtener una retroalimentación del proceso de planificación de las compras, con el que, tanto de parte de las unidades solicitantes como de la DPI, puedan efectuar los aportes necesarios, obtener la información pertinente, con el propósito de emprender oportunamente las acciones requeridas, para con ello contribuir a la mejora continua de la gestión de compras.

<sup>63</sup> Ley N. 9986, artículo 131; Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo N. 33411, artículos 227 y 230; Reglamento Orgánico de la Universidad Técnica Nacional, artículos 56 y 57; Reglamento de Proveeduría de la Universidad Técnica Nacional, artículos 5, 6, 7, 12 y 14 inciso d).

<sup>64</sup> Ley N. 9986, artículos 40 y 8 inciso b).

<sup>65</sup> Ley N. 9986, artículo 31; Reglamento a la Ley General de Contratación Pública, Decreto Ejecutivo N. 43808, artículo 80. Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo N. 33411, artículo 7.

<sup>66</sup> Reglamento Orgánico de la Universidad Técnica Nacional, artículo 57, numeral 4. Normas de Control Interno para el Sector Público, normas 6.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.4.

## 2.2 RECOMENDACIONES DEL INFORME DE LA COMISIÓN PARA MEJORA CONTINUA EN LA PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL

La labor realizada procura generar insumos para la Universidad, en relación con la gestión de la contratación pública, así como el correspondiente proceso de adquisición de bienes, servicios y obras. Como parte de esa labor, aunado a los elementos señalados en los apartados anteriores y, en acatamiento a los objetivos del estudio, se realizan acotaciones referentes al Informe de la Comisión para mejora continua en la Proveeduría Institucional (CMCPI).

Tal como se indica en el apartado de Antecedentes del presente Informe, en marzo de 2021 el Consejo Universitario conoce y da por recibido el Informe supra citado, y acuerda: *“Instruir a la Dirección General de Administración Universitaria en coordinación con la Dirección de Proveeduría Institucional en implementar cada una de las recomendaciones contenidas en el informe referido, esto dentro de los plazos que el documento indica...”*.

Cabe destacar que, no se suministra evidencia relacionada con la razón de ser de la CMCPI, ni del análisis efectuado para su conformación, solamente existe una carta<sup>67</sup> por medio de la cual se indican los nombres de los integrantes. No obstante, y pese a que no se suministra un documento referente a la razón de ser de la Comisión, de previo o en el momento de su conformación, en el Informe elaborado, se indica que el objetivo es:

Revisar los procedimientos y procesos de la Proveeduría Institucional, con la finalidad de recomendar estrategias para mejora continua y la inserción de un nuevo modelo administrativo acorde con las nuevas técnicas administrativas y tecnologías de la información, así como proponer recomendaciones de mejora, ante la Rectoría de la UTN.

En el Informe de referencia, la Comisión brinda 13 recomendaciones, relacionadas con los siguientes puntos:

---

<sup>67</sup> Carta R-1065-2020 del 15 de octubre de 2020, suscrita por el Dr. Emmanuel González Alvarado, Rector.

**Figura 6 Elementos señalados en el Informe de la Comisión para mejora continua en la Proveeduría Institucional**



**Fuente: Elaborado por la Auditoría Universitaria, con base en el Informe de la Comisión para mejora continua en la Proveeduría Institucional.**

Con la emisión del citado Informe, se denota que se han realizado esfuerzos por parte de la Administración, con el propósito de fortalecer la gestión de contratación pública en la UTN y el correspondiente proceso técnico operativo de adquisiciones.

Sin embargo, a partir de la información<sup>68</sup> recabada se constata que las situaciones indicadas por parte de la Comisión continúan sin ser solventadas, pues aún no existe evidencia del organigrama de la DPI formalmente publicado; el Reglamento de esa Dirección es el mismo vigente<sup>69</sup> desde hace más de 10 años; no se ha informado sobre la publicación de flujogramas actuales de los

<sup>68</sup> La información referente a la temática del Informe de la Comisión para la mejora continua en la Proveeduría Institucional, es remitida mediante carta DPI-346-2022 del 30 de agosto de 2022, por parte del Lic. Florindo Arias Salazar, Director de la DPI.

<sup>69</sup> Aprobado por la Comisión Conformadora mediante acuerdo 4-19-2010, Acta No.19-2010, del 28 de junio de 2010. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 89 del 10 de mayo de 2011.



procesos de la DPI; no se remiten documentos formales en los que se muestre el acatamiento total de alguna de las trece recomendaciones.

En relación con el elemento denominado “Reglamento”, en el Informe de la Comisión para mejora continua en la Proveduría Institucional, se incluyen los siguientes comentarios: “*Está desactualizado y posee una estructura que no permite visualizar su funcionalidad.*”, y añade: “*Debe regularse la conformación, instancias, tareas, responsabilidades, entre otros, para el área o sistema de abastecimiento de la UTN*”. La recomendación de la Comisión en relación con este punto es:

Elaborar un reglamento que regule las actividades del sistema de abastecimiento de la UTN, atendiendo la legislación aplicable, congruente con el marco jurídico, la realidad universitaria, y demás Universidades Públicas. Se sugiere contenga normas que le permitan ser flexible y adaptable ante los cambios legales, tecnológicos y técnicos, conforme la realidad nacional y las normas de regulación financiera y presupuestaria, que garantice la transparencia y accesibilidad para todas las personas interesadas.

En la información suministrada<sup>70</sup> por la DPI con respecto a este punto, se indica que en el 2021 no se continuo con el Reglamento, debido a la Ley General de Contratación Pública, Ley N. 9986. Se añade que la Rectoría conformó la Comisión de Implementación de la citada Ley “... y actualmente se está trabajando en el reglamento en cuantoo (sic) a lo que concierne a la ley; pendiente lo que la reglamentación pueda disponer”.

Referente a lo anterior, la DPI remite a la Auditoría Universitaria un documento en borrador con artículos del Reglamento de Proveduría de la Universidad Técnica Nacional vigente, con tachones, adiciones de otros artículos, comentarios y subrayados, sin embargo, no se suministra un documento en limpio con la propuesta elaborada.

Es importante recordar a la administración que, si bien la CMCPi es de la opinión que el Reglamento supra citado “*Está desactualizado y posee una estructura que no permite visualizar su funcionalidad.*”, esto no implica que pueda omitirse su aplicación, pues el artículo 13 de la Ley

<sup>70</sup> Documentos suministrados como parte de la carta DPI-346-2022 del 30 de agosto de 2022, suscrita por el Lic. Florindo Arias Salazar, Director de la DPI.

General de la Administración Pública, establece<sup>71</sup>: **“La Administración estará sujeta, en general, a todas las normas escritas y no escritas del ordenamiento administrativo, y al derecho privado supletorio del mismo, sin poder derogarlos ni desaplicarlos para casos concretos.”** (el subrayado y el Estilo de Fuente Negrita no corresponden al original). En relación con lo anterior, la Procuraduría General de la República indica<sup>72</sup>:

Tal y como lo ha reiterado la jurisprudencia administrativa de la Procuraduría General de la República, de conformidad con este principio de inderogabilidad singular de los reglamentos, derivado del artículo transcrito, **aunque la Administración puede derogar o reformar un reglamento, no puede excepcionar para uno o varios casos la aplicación de este mientras se encuentre vigente**

... De conformidad con el principio de legalidad que rige todo el actuar de la Administración Pública, según lo ordenan los artículos 11 de la Constitución Política, 11 y 13 de la Ley General de la Administración Pública, es claro que al promulgarse y encontrarse vigente, el artículo..., esa Institución no puede desaplicarlo (el subrayado y el Estilo de Fuente Negrita no corresponden al original).

Por otro lado, con respecto al punto denominado “*De la ausencia de normativa para regular las compras menores, imprevistas y urgentes*”, la recomendación de la Comisión es la siguiente:

Tal y como se ha señalado, existe un Reglamento General del Fondo Cajas Chicas, el cual tiene un rango jerárquico mayor a nuestro reglamento interno de fondo de caja chica. Una forma rápida y sencilla de agilizar nuestra normativa interna, sería flexibilizar nuestro reglamento interno de caja chica, al menos a lo dispuesto en el decreto ejecutivo.

Aunado a lo anterior, en el Informe DPI 011-2022<sup>73</sup>, de parte de la administración se brindan algunos datos referentes a la infructuosidad en las líneas y procedimientos de contratación efectuados. Como parte de las causas de esa infructuosidad, se menciona el hecho de que “... *representan negocios poco atractivos para los participantes. Considerando que una contratación*

<sup>71</sup> Ley General de la Administración Pública, Ley N. 6227, artículo 13, numeral 1.

<sup>72</sup> Procuraduría General de la República, Dictamen C-133-2002 del 4 de junio de 2002.

<sup>73</sup> Informe DPI 011-2022 del 29 de agosto de 2022, denominado “*Informe final de las líneas infructuosas en los procesos de compra durante el año 2021.*”, suscrito por el Lic. Florindo Arias Salazar, Director de la DPI; Licda. Gabriela Ávila Corrales, Jefe del Área de Control y Seguimiento de la DPI; Lic. Julio César Pérez Hernández, Jefe del Área de Logística de la DPI y Lic. Ileana Morera Azofeifa, Asesora de la Dirección General de Administración Universitaria (DGAU); dirigido al Máster Eduardo Selva Villegas, Director de la DGAU y al Director de la DPI. Dicho documento fue remitido a la Auditoría Universitaria mediante la carta DPI-406-2022 del 26 de septiembre de 2022, suscrita por el Director de la DPI.

directa de escasa cuantía conlleva al menos los siguientes elementos que los participantes tienen que contemplar...”, y se agregan una serie de elementos. Además, en el informe se recomienda la flexibilización del Reglamento de Caja Chica<sup>74</sup>, a fin de contratar directamente por esa vía.

En relación con este tema, de parte de la Dirección General de Administración Universitaria (DGAU) se solicita<sup>75</sup> criterio legal a la Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ). En el asunto de la carta se indica: “Consulta sobre uso del Reglamento de Caja Chica para gastos menores”. De parte de la DGAJ se brinda el criterio<sup>76</sup> y, entre otras cosas, concluye:

**... los procedimientos excepcionales de caja chica necesariamente deben responder a compras de menor cuantía y no previstas oportunamente, siempre con el objetivo de atender el pago de necesidades urgentes e indispensables. Por lo que, se considera errónea e improcedente la interpretación del órgano consultante, en cuanto a que, con base en lo interpretación de dichas normas, el uso de la caja chica no debe quedar supeditado únicamente para la atención de gastos urgentes y/o imprevisibles, sino que también existen gastos menores que por su baja cuantía no es conveniente que se tramite por los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento.**

**4. Es fundamental dejar claro a la Dirección General Universitaria que para el uso de las facilidades de la caja chica se configure que el gasto menor revista de imprevisibilidad y, a la vez, urgencia. No podrá utilizarse la caja chica si uno de estos requisitos se encuentra ausente.**

**5. Se recomienda a la Dirección General para que, de conformidad con lo reiterado con la jurisprudencia administrativa, desde la etapa de formulación presupuestaria se prevean todas las necesidades institucionales, con el fin de garantizar el uso racional de la caja chica.** (El subrayado y el Estilo de fuente negrita no corresponden al original).

Además de lo anterior, es importante destacar que, si bien el uso de la caja chica es permitida por el ordenamiento jurídico para efectuar compras, tal como se indica en el criterio de la DGAJ, así como en la normativa y jurisprudencia aplicable, estas deben<sup>77</sup> ser compras menores, urgentes e imprevisibles, y tal como se ha mostrado a lo largo de este informe, el ordenamiento

<sup>74</sup> Denominado Reglamento del Fondo de Caja Chica de la Universidad Técnica Nacional.

<sup>75</sup> Carta DGAU-686-2021 del 17 de noviembre de 2021, suscrita por el Máster Eduardo Selva Villegas, Director de la Dirección General de Administración Universitaria, dirigida al Lic. Jonathan Morales Herrera, Director de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

<sup>76</sup> Documento DGAJ-099-2022 del 28 de febrero de 2022, suscrito por la Máster Sofía Wilson Morales, Asesora Legal de la DGAJ.

<sup>77</sup> La Ley General de Contratación Pública, Ley N. 9986, señala en su artículo 3, las excepciones de los procedimientos ordinarios establecidos en esa ley; en el inciso g) indica para las compras realizadas con fondos de caja chica, que estas: “... sean indispensables e impostergables, siempre y cuando no excedan el diez por ciento (10%) del monto fijado para la licitación reducida, conforme lo disponga el reglamento de esta ley.”

jurídico y técnico brinda un abanico de posibilidades para poder solventar las situaciones que se presenten, todo ligado a una adecuada planificación de las adquisiciones. Y sobre este tema la Auditoría Universitaria ya ha brindado diferentes productos en cuanto a su ejecución y legalidad.

Por ello, debe interiorizarse el criterio emanado por la DGAJ y considerar que, además de las situaciones comentadas, una compra por caja chica exime de la asesoría o apoyo<sup>78</sup> por parte del ente técnico en materia de contratación pública, por lo que las unidades o dependencias compradoras no cuentan con ese respaldo que brinda la dependencia<sup>79</sup> responsable de conducir los procedimientos de contratación administrativa para satisfacer sus necesidades, con todos los riesgos operativos, legales y económicos que esto puede contraer.

Por otra parte, dentro de las recomendaciones también se tratan tópicos referentes a la estructura de la DPI, aunado a ello, el Director de la DPI indica<sup>80</sup> que se crea una subcomisión denominada Estructura Funcional y agrega: *“Está en proceso un análisis de funciones y estructura funcional de la Proveeduría..., a efectos de determinar necesidades o cambios, de frente al cumplimiento e implementación de la nueva Ley General de Contratación Pública.”*

Cabe destacar que, tal como se indica en relación con el tema del uso de la caja chica, también lo relativo a la estructura funcional de la DPI, si la administración a partir de un análisis formal, y una vez cumplidos los requisitos normativos correspondientes, se determina la necesidad de efectuar cambios en la estructura funcional, bajo las condicionantes citadas, la administración se encuentra en potestad de realizar las variaciones.

Sin embargo, es importante que la administración se concientice que el asunto de fondo no es tanto de aprobación o flexibilización de un reglamento de caja chica, ni tampoco la existencia de líneas y procedimientos de contratación infructuosos se soluciona con ello, tampoco es un asunto de variaciones en la estructura funcional de la DPI<sup>81</sup>; el tema de fondo es de gestión de las

---

<sup>78</sup> De acuerdo con el Reglamento del Fondo de Caja Chica de la Universidad Técnica Nacional, la participación de la Dirección de Proveeduría Institucional se limita a dar el visto bueno haciendo constar que no hay existencias en bodega de lo solicitado, en el caso de la adquisición o compra de materiales y suministros (artículo 14).

<sup>79</sup> Reglamento Orgánico de la Universidad Técnica Nacional, artículo 56; Reglamento de Proveeduría de la Universidad Técnica Nacional, artículos 5, 6 y 7.

<sup>80</sup> Carta DPI-406-2022 del 26 de septiembre de 2022, suscrita por el Lic. Florindo Arias Salazar, Director de la DPI.

<sup>81</sup> Que tal como se indica, si se determina la necesidad y, una vez cumplidos los requisitos normativos, la administración está en potestad de efectuar las variaciones requeridas.

adquisiciones, de manera que el cambio que realmente ataca las causas de las falencias existentes es un cambio en la forma de hacer las cosas, en relación estrecha con la gestión de la contratación pública, aprovechando la técnica y las modalidades de contratación que brinda el ordenamiento jurídico.

### **2.3 DE LA CARTA DE ADVERTENCIA AU-335-2019 Y DE LA ASESORÍA AU-349-2021<sup>82</sup>**

Tal como se indica en el apartado Antecedentes de este Informe, por medio de la carta AU-335-2019, la Auditoría Universitaria remite la Advertencia relativa a la gestión de implementación del Sistema Digital Unificado de Compras Públicas, referente a riesgos por no utilizar el sistema de compras públicas, ya que casi dos años después de la firma del contrato (en el 2017), la UTN no lo había utilizado, pese a que ya había realizado la erogación de recursos para dicho uso. Cabe destacar que, actualmente la Universidad incorpora los procedimientos de contratación pública en el SICOP.

Por su parte, en el 2021 se emite la carta AU-349-2021, con la que se brinda la Comunicación de resultados referentes a la aplicación de la herramienta para el seguimiento de la gestión pública sobre el uso del SICOP en las instituciones públicas<sup>83</sup>.

Con la carta supra citada, se realizan una serie de observaciones a la administración en relación con el SICOP. Dentro de ellas, se hace referencia a los montos a pagar por el uso y la implementación de dicho sistema, de acuerdo con la información de los contratos.

Cabe destacar que, tal como ha indicado<sup>84</sup> la Auditoría Universitaria, con la entrada en vigencia de la Ley General de Contratación Pública, Ley N. 9986, se propone un nuevo reglamento de modelo tarifario para el uso del SICOP. En dicha propuesta, el monto a pagar por parte de los usuarios del sistema digital unificado se determina, entre otros, por cantidad de procedimientos iniciados, por lo que, retoma interés el efectuar una adecuada planificación de las adquisiciones,

---

<sup>82</sup> Carta AU-349-2021 del 4 de octubre de 2021, dirigida al Dr. Emmanuel González Alvarado, Rector y al Lic. Florindo Arias Salazar, Director de la DPI. En relación con esa carta, mediante carta AU-302-2021 del 31 de agosto de 2021, se remite a la CGR la herramienta para el seguimiento de la gestión pública sobre el uso del SICOP en las instituciones públicas y Resumen Ejecutivo referente a los resultados obtenidos; esos resultados se comunican al Rector y al Director de la DPI, por medio de la carta AU-349-2021.

<sup>83</sup> Labor realizada en coordinación con la Contraloría General de la República.

<sup>84</sup> Carta AU-403-2022 del 12 de octubre de 2022, dirigida al Dr. Emmanuel González Alvarado, Rector de la UTN.

lo que conlleva consolidar los objetos de igual o similar naturaleza, a fin de conseguir mayores beneficios a un menor precio y realizar un adecuado uso de los recursos públicos<sup>85</sup>.

Por otra parte, en la carta se hace referencia a las obligaciones de transparencia y a sacar el mayor aprovechamiento del SICOP. Sobre este último punto es importante destacar que, la Ley General de Contratación Pública, Ley N. 9986, establece que toda la actividad de contratación pública que regula dicha ley, debe realizarse por medio del sistema digital unificado<sup>86</sup>, y añade: “*La utilización de cualquier otro medio para la promoción de procedimientos de contratación acarreará su nulidad absoluta...*”<sup>87</sup>.

Además, la supra citada Ley establece<sup>88</sup> que los procedimientos de licitación mayor, menor y reducida deben contar, entre otros, con la “**Publicidad de todas las actuaciones a través de la incorporación oportuna y accesible en el sistema digital unificado, de la información que se derive con ocasión de la actividad contractual.**”; se agrega: “**La forma y el tiempo en que se dé acceso a la información no podrá exceder las veinticuatro horas posteriores a su emisión. La inobservancia de este plazo podrá acarrear responsabilidad del funcionario.**” (El subrayado y el estilo de fuente Negrita no corresponden al original).

En relación con el tema de transparencia, es importante señalar que dicho principio general de la contratación pública establece<sup>89</sup> que todos los actos emitidos: “... *con ocasión de la actividad de contratación pública deben ser accesibles de manera libre e igualitaria por parte... de cualquier persona interesada. La información que se ponga a disposición debe ser cierta, precisa, oportuna, clara y consistente.*”.

En virtud de lo anterior, retoma interés que toda la información concerniente a cada procedimiento de contratación, se incorpore en el SICOP con oportunidad y de forma completa, con el objetivo

<sup>85</sup> Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley N. 8422, artículo 3.

<sup>86</sup> De acuerdo con la Circular DGABCA-0086-2022 del 7 de septiembre de 2022, suscrita por la señora Yesenia Ledezma Rodríguez, Directora General Bienes y Contratación Administrativa, en la que se indica: “... *que el Sistema Digital Unificado que se utilizará a partir del 01 de diciembre del 2022, será el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)...*”, y añade: “... *por lo que se están realizando los ajustes en este sistema, con la finalidad de dar cumplimiento a las normas previstas en la Ley No. 9986.*”.

<sup>87</sup> Ley N. 9986, artículo 16. Además, el artículo 11 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo N. 33411, también establece que el “... expediente deberá contener la totalidad de las actuaciones desarrolladas tanto por la Administración contratante como por los demás participantes...”.

<sup>88</sup> Ley N. 9986, artículos 56, inciso g); 61, inciso g) y 63, inciso e).

<sup>89</sup> Ley N. 9986, artículo 8, inciso c).

de conseguir que la información institucional cumpla con los atributos de la calidad<sup>90</sup> de la información y pueda ser accesible por parte de cualquier interesado, en aras de promover el control ciudadano y la transparencia en el actuar universitario.

Con respecto al tema de la capacitación; en lo referente a la temática general de la contratación pública, en los puntos 2.1.3 y 2.1.4 de este Informe se comenta sobre ello. En relación con el tópico específico del uso del sistema digital unificado, es importante conocer que la Ley N. 9986 establece que la capacitación por el uso de dicho sistema no representará ningún costo para las entidades<sup>91</sup>.

Claro está, si las instituciones deciden realizar procedimientos de contratación para recibir capacitación al respecto, deberán acogerse a los términos que se establezcan en esas contrataciones. Por lo anterior, la UTN puede aprovechar la facilidad que brinda la Ley N. 9986, con el propósito de obtener los conocimientos requeridos en cuanto al uso del sistema sin costo alguno. Referente a la temática en comentario, la CGR<sup>92</sup> indica<sup>93</sup>:

La capacitación en el uso de la plataforma también juega un rol esencial no sólo para un correcto uso de la misma, sino para atender las inquietudes sobre la pertinencia y oportunidad por parte de un grupo de usuarios, lo cual puede incidir además en que las instituciones no utilicen todas las etapas del SICOP. Ello plantea la necesidad de una valoración periódica de la calidad de la misma y de la percepción de satisfacción del usuario para una mejora continua de la forma en que se está realizando.

## 2.4 OTROS ELEMENTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

Como punto final de este apartado, para la Auditoría Universitaria resulta fundamental destacar dos temáticas, la primera, relativa a los expedientes de las contrataciones anteriores y, la segunda, referente a algunas causales de sanción a los funcionarios, establecidas en la Ley

<sup>90</sup> Normas de Control Interno para el Sector Público, norma 5.6.

<sup>91</sup> Ley N. 9986, artículo 16.

<sup>92</sup> Tal y como se indicó en la carta AU-130-2022 del 24 de marzo de 2022, durante dicho año la CGR ha impartido un curso virtual gratuito, referente a la Ley N. 9986, que consta de 16 módulos, disponible en el siguiente enlace: <https://sites.google.com/cgr.go.cr/lcgp/gesti%C3%B3n-del-conocimiento>. Además, de acuerdo con la Unidad de Prensa y Comunicaciones del órgano contralor, más de 5.500 personas se han inscrito para realizar el curso.

<sup>93</sup> Transformación hacia una mayor eficiencia de las compras públicas electrónicas: beneficios y ahorros de la unificación, DFOE-SAF-OS-00003-2019, disponible en el enlace web: [https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs\\_cgr/2020/SIGYD\\_D\\_2020002010.pdf](https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2020/SIGYD_D_2020002010.pdf).

General de Contratación Pública. Por lo anterior, seguidamente se transcriben una serie de artículos de normativa relacionada con los temas citados, con la finalidad de contribuir<sup>94</sup> a la cultura de control interno institucional y brindar un refrescamiento referente a normativa vigente, de acatamiento por parte de los servidores correspondientes de la UTN:

#### 2.4.1 Expedientes de contrataciones anteriores

Si bien es cierto, con la utilización del SICOP los expedientes de las contrataciones se elaboran electrónicamente, esto no restringe la responsabilidad de la Dirección de Proveeduría Institucional en cuanto al resguardo de los expedientes elaborados en físico, pues una de sus funciones<sup>95</sup> consiste en *“Recibir, tramitar y custodiar toda clase de documentos y expedientes relacionados con sus funciones y proceder a su archivo cuando corresponda.”*

Sobre este tópico, es importante acotar que los expedientes de contratación administrativa son tipos documentales con valor científico cultural<sup>96</sup>, patrimonio documental de conservación permanente en cualquier soporte, en todas las universidades públicas.

En relación con lo anterior, la normativa universitaria indica<sup>97</sup>:

El Sistema Universitario de Gestión Documental, **constituye un sistema integrado de información y comunicación que garantiza el acceso oportuno, transparente y confiable a los datos y la información institucional en el momento en que sean requeridos.** Este sistema está compuesto por los Archivos de Gestión, Archivos Periféricos, Especializados y el Archivo Institucional los cuales debidamente organizados conforman el fondo documental de la Universidad Técnica Nacional.

Funciones de los Archivos de Gestión. ...

... b) ... velar por la organización, conservación y seguridad de los documentos que se custodian en la oficina en la cual laboran.

c) Cumplir y velar porque se ejecuten las medidas de conservación y preservación documental...

<sup>94</sup> Plan Estratégico de la Auditoría Universitaria 2019 - 2025, Factor Estratégico: apoyo a la cultura de control interno institucional.

<sup>95</sup> Reglamento de Proveeduría de la Universidad Técnica Nacional, artículo 14, inciso a).

<sup>96</sup> Resolución CNSD-03-2016-Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos-San José a las once horas del 28 de octubre del dos mil dieciséis, Establece una declaratoria general de los tipos documentales con valor científico cultural en todas las universidades públicas de Costa Rica, Dirección General de Archivo Nacional, D.3. Documentos administrativos, 6. Expedientes de contratación administrativa. Además, el Instructivo para la Valoración Documental, Archivo Institucional, marzo 2021, 3.3.3. Documentos administrativos, 6. Expedientes de contratación administrativa.

<sup>97</sup> Reglamento Sistema Universitario de Gestión Documental (SUGED), artículos 3, 7, 8 y 24.



Funciones de los encargados de Archivos de Gestión.

... j) Proteger la documentación de factores... que puedan afectar su conservación.

... l) Controlar el préstamo de documentos.

Razones para la utilización de soportes electrónicos u otra tecnología.

... a) Seguridad: se aplicará básicamente a aquellos documentos de valor permanente... La documentación declarada con valor científico cultural, histórico o permanente, podrá automatizarse o digitalizarse solamente como respaldo de la información y no como medio sustitutivo del soporte en papel.<sup>98</sup>

**En cada unidad administrativa y de gestión se debe llevar un control de los expedientes existentes**, por lo que se debe utilizar un registro de los mismos como el indicado en este Instructivo. Esto además de ser un control para la persona encargada del archivo de gestión es una guía para el Archivo Institucional, ya que así indican la cantidad existente en la unidad, lo cual facilita el proceso de transferencia a futuro.<sup>99</sup>

Por lo anterior, corresponde a la administración universitaria, en especial a la Dirección de Proveeduría Institucional, establecer los controles pertinentes, en aras de efectuar una adecuada custodia, manejo y conservación de los expedientes de las contrataciones administrativas, pues se trata de tipos documentales con valor científico cultural, por lo que forman parte del patrimonio histórico de la UTN y del país.

Para ello, es fundamental el compromiso superior y la supervisión constante, con el fin de contribuir a propiciar una adecuada gestión documental, la correspondiente protección y conservación<sup>100</sup> de los documentos y el patrimonio público, el cual debe protegerse contra cualquier pérdida<sup>101</sup>, irregularidad o uso indebido<sup>102</sup>, de manera que se garantice que la información de la institución sea confiable y oportuna, así como que se cumple el ordenamiento jurídico y técnico existente.

#### 2.4.2 Causales de sanción a funcionarios públicos

La Constitución Política de la República de Costa Rica establece<sup>103</sup> que nadie puede alegar ignorancia de la ley, por lo que, como parte de los aportes brindados por la Auditoría Universitaria

<sup>98</sup> Reglamento Sistema Universitario de Gestión Documental (SUGED), artículos 3, 7, 8 y 24.

<sup>99</sup> Instructivo para la gestión de expedientes administrativos, Archivo Institucional, agosto 2022, 3.6. Registro de expedientes.

<sup>100</sup> Normas de Control Interno para el Sector Público, normas 2.2, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.5.1, 5.4.

<sup>101</sup> Expediente de la contratación N. 2019CD-000666-UTN, Herramientas y productos de Ferrería.

<sup>102</sup> Ley General de Control Interno, Ley N. 8292, artículo 8; Normas de Control Interno para el Sector Público, norma 1.2.

<sup>103</sup> Artículo 129.

en este Informe, a continuación, se transcriben algunos puntos de interés, con el propósito que la administración de la UTN tenga presente estos temas y se profundice en el conocimiento de la Ley N. 9986, de la cual, el artículo 125 establece como objeto de sanción a los funcionarios públicos, entre otras, las siguientes conductas:

... c) **Omitir tramitar el procedimiento de contratación en el sistema digital unificado**, con las salvedades establecidas en la presente ley.

... e) **Evadir los procedimientos ordinarios, cuando no se haya seguido el procedimiento correspondiente o emplee de manera indebida las excepciones establecidas** en la presente ley.

... i) **Recibir bienes, obras o servicios que no sean acordes con el objeto adjudicado.**

... o) **No incorporar, dentro del plazo fijado** en los artículos 56, inciso g); 61, inciso g) y 63, inciso e) de la presente ley, **la información en el sistema digital unificado.**

... r) **Provocar una situación de urgencia debida a su deficiente gestión y que esta origine el desabastecimiento de bienes o servicios necesarios para la institución o dejar caducar el contrato**, siempre que en tal caso con su omisión se haya dado lugar a ello.

... v) **Calificar de excepcionales circunstancias que técnicamente no lo sean, con la finalidad de modificar el contrato hasta un máximo de un cincuenta por ciento (50%)**, por parte del o los funcionarios técnicos a cargo.

w) **Incumplir las obligaciones de consolidación de requerimientos de consumo y aprovechamiento de economías de escala o las prohibiciones de fragmentación de adquisiciones** establecidas en esta ley. (El subrayado y el estilo de fuente Negrita no corresponden al original).

### 3. CONCLUSIONES

La contratación pública impacta la actividad económica del país, por cuanto desempeña una función trascendental en el cumplimiento de los objetivos institucionales, con lo cual se busca beneficiar a la población meta y se contribuye a la creación de valor público<sup>104</sup>.

Conforme con los resultados alcanzados, se determina que tanto la Administración, entre otros, con el Informe de la Comisión para mejora continua en la Proveeduría Institucional, así como la Auditoría Universitaria a través de varios servicios brindados, han realizado esfuerzos para contribuir a fortalecer la gestión de compras públicas en la UTN.

<sup>104</sup> Contraloría General de la República. Informe DFOE-SAF-OS-00003-2019. Transformación hacia una mayor eficiencia en las compras públicas electrónicas: beneficios y ahorros de la unificación.

Sin embargo, se constata que las situaciones indicadas en el Informe de la CMCPPI siguen sin ser solventadas, pues aún no existe evidencia del organigrama de la DPI formalmente publicado; el Reglamento de esa Dirección es el mismo vigente desde hace más de 10 años, el cual se indica está desactualizado; no se ha informado sobre la publicación de flujogramas actuales de los procesos de la DPI; no se remiten documentos formales en los que se muestre el acatamiento total de alguna de las recomendaciones.

Con respecto a las sugerencias emitidas por la Auditoría Universitaria en la carta de Advertencia AU-335-2019 y la Asesoría AU-349-2021, se determina que la administración realiza sus procedimientos de contratación mediante el SICOP. En relación con la temática de transparencia, se debe destacar que, toda la información concerniente a cada procedimiento de contratación, debe incorporarse en el SICOP con oportunidad y de forma completa, con el fin de que la información institucional cumpla con los atributos de la calidad de la información y pueda ser accesible por parte de cualquier interesado, en aras de promover el control ciudadano y la transparencia en el actuar universitario.

Aunado a ello, se hace hincapié en lo referente a la capacitación en materia de contratación pública y todo lo relacionado, tanto de parte de los funcionarios de la Dirección de Proveeduría Institucional, como de los demás servidores que, de una u otra forma, tienen participación e injerencia en la gestión de compras públicas.

De esta manera, poder contribuir a fortalecer esa gestión, desde la planificación; el planteamiento de las necesidades, las cuales deben estar alineadas con los planes institucionales y nacionales, todo el proceso previo a la contratación; así como la ejecución; la distribución o entrega y el seguimiento, con el propósito de identificar si lo adquirido cumple a satisfacción con los requerimientos de los usuarios, en beneficio de la UTN, sus objetivos y población meta; caso contrario, realizar las gestiones requeridas y oportunas con los adjudicatarios, para que los usuarios puedan acceder a bienes, obras y servicios de calidad al mejor precio, claro está, si así fue establecido en el pliego de condiciones.

Además, es fundamental aprovechar los diferentes tipos o modalidades de compras existentes, como las de modalidad de entrega según demanda, los convenios marco, las licitaciones con precalificación, la subasta inversa electrónica, entre otros, lo cual unido a una adecuada planificación y proceso de consolidación de necesidades, posibilite el efectuar las adquisiciones aprovechando economías de escala y, de esta forma, reducir la cantidad de procedimientos de contratación que se realizan, con el objetivo de poder incrementar y robustecer los controles sobre cada procedimiento, con el correspondiente y adecuado control de plazos de vigencia de las contrataciones.

Aunado a ello, es importante la existencia y fortalecimiento de controles en cuanto a los bienes almacenados, considerando temas de caducidad, condiciones de almacenamiento, temperatura, entre otros, así como las líneas de comunicación, de forma que no se lleven a cabo contrataciones para adquirir bienes de los que se tiene suficiente disponibilidad en los almacenes y bodegas, así como, considerar las modalidades de contratación tales como las indicadas en el párrafo anterior, a fin de que los bienes almacenados sean los indispensables en el corto plazo, disminuyendo la posibilidad de que alguno de ellos llegue al término de su vida útil sin haber sido entregado a la unidad solicitante, lo que implicaría un desperdicio de recursos.

También, es relevante el establecimiento adecuado de las condiciones del pliego de condiciones, para poder adquirir los bienes, obras y servicios de calidad a precios competitivos (principio de valor por el dinero), no solamente enfocarse en el precio, pues no resulta de utilidad efectuar compras a un bajo precio si lo adquirido es de una calidad inadecuada. Para ello, es fundamental que, desde el planteamiento de las necesidades se incorporen los requerimientos a cumplir por parte de los posibles adjudicatarios, con el apoyo y acompañamiento de la Dirección de Proveeduría Institucional, como encargada de los procedimientos de contratación pública y de la conducción de los trámites relacionados.

Es importante que la administración se concientice que el asunto de fondo no es tanto de aprobación o flexibilización de un reglamento de caja chica, ni tampoco es un asunto de variaciones en la estructura funcional de la DPI; el tema de fondo es de gestión de las compras públicas, por lo que el cambio que realmente ataca la causa-raíz de las falencias existentes es

un cambio en la forma de hacer las cosas, que se resume en mejorar la gestión de las compras públicas en la UTN.

Es importante acotar, que el cambio normativo es la oportunidad de reflexión y estrategia para aprovechar las oportunidades, siendo resilientes, comprometidos con la Universidad Pública de más reciente creación que, como tal, debe ser líder en cuanto a innovación<sup>105</sup>, en la forma de hacer las cosas, tomando las mejores prácticas existentes y mejorando a través de la búsqueda de la excelencia, siempre en apego al bloque de legalidad.

De manera que, se debe sacar el máximo provecho a todo lo referente a la gestión de compras públicas, interiorizando que corresponde a un motor que permite contribuir al logro de los objetivos y fines institucionales, y darse cuenta del impacto y la gran responsabilidad que se tiene como casa de enseñanza superior, de cumplir con eficiencia, eficacia y excelencia las estrategias que permitan la modernización de la gestión<sup>106</sup> y los compromisos institucionales frente a las generaciones presentes y futuras<sup>107</sup>.

Por medio de la gestión de compras públicas se tiene la obligación de impulsar la finalidad de la UTN y dicha gestión debe considerarse como una gran oportunidad estratégica para impulsar democráticamente el factor socioeconómico en cuanto a *“Desarrollar programas especiales de fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, mediante acciones de asistencia técnica, capacitación y formación integral, para procurar su desarrollo y expansión.”*<sup>108</sup>.

Este Informe contribuye con el objetivo institucional *“Establecer estrategias que permitan la modernización de la gestión, para el fortalecimiento del capital humano, la transparencia universitaria, la simplificación de trámites, la eficiencia y la eficacia de todas las instancias de la universidad.”*, cuyo riesgo del objetivo es *“Ausencia o inadecuado proceso de planificación estratégica a nivel institucional.”*, a fin de apoyar la acción estratégica del eje *“Gestión y*

<sup>105</sup> Plan Institucional de Desarrollo Estratégico 2022-2026, 4.1 Misión, 4.3 Valores.

<sup>106</sup> El Plan Institucional de Desarrollo Estratégico 2022-2026 de la UTN, establece para el eje Gestión y Sostenibilidad, la *“Política para la modernización de la gestión para el cumplimiento de los objetivos institucionales”*.

<sup>107</sup> Plan Institucional de Desarrollo Estratégico 2022-2026, 4.3 Valores.

<sup>108</sup> Ley Orgánica de la Universidad Técnica Nacional, Ley N. 8638, artículo 4. Fines, inciso f).

*Sostenibilidad” incluida en el PIDE UTN 2022-2026: “5.2 Desarrollar programas balanceados de fortalecimiento de la infraestructura y bienes institucionales.”.*

#### 4. ANEXOS

##### ANEXO 1

**Subpartidas presupuestarias presentes, al menos, en dos procedimientos de contratación por año, en las que se clasifican el 89,1% de los procedimientos de contratación realizados por la UTN, 2019 - 2022**

N.	Subpartida	Cantidad de procedimientos de contratación relacionados con la subpartida
1	Actividades protocolarias y sociales	235
2	Bienes intangibles	207
3	Actividades de capacitación	192
4	Mantenimiento y reparación de otros equipos	144
5	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	113
6	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	113
7	Servicios en ciencias de la salud	62
8	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	61
9	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de Información	57
10	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	56
11	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	55
12	Servicios generales	41
13	Otros servicios de gestión y apoyo	41
14	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	38
15	Publicidad y propaganda	35
16	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	33
17	Impresión, encuadernación y otros	31
18	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	30
19	Equipo de comunicación	29
20	Información	29
21	Herramientas e instrumentos	27
22	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	23
23	Maquinaria y equipo para la producción	20
24	Repuestos y accesorios	20
25	Equipo y mobiliario de oficina	19
26	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	19
27	Productos veterinarios	18
28	Textiles y vestuario	17
29	Productos de papel, cartón e impresos	17
30	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	16
31	Servicios en ciencias económicas y sociales	16
32	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	15
33	Materia prima	14
34	Alimentos para animales	14
35	Útiles y materiales de limpieza	12
36	Servicios de ingeniería y arquitectura	12
<b>Total de procedimientos de contratación</b>		<b>1.881</b>

Fuente: Elaborado por la Auditoría Universitaria, con base en datos del SIAC de la CGR y del SICOP.

## ANEXO 2

**Subpartidas presupuestarias presentes todos los años, en las que se clasifican el 93,1% de los procedimientos de contratación realizados por la UTN, 2019 - 2022**

N.	Subpartida	Cantidad de procedimientos de contratación relacionados con la subpartida
1	Actividades protocolarias y sociales	235
2	Bienes intangibles	207
3	Actividades de capacitación	192
4	Mantenimiento y reparación de otros equipos	144
5	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	113
6	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	113
7	Servicios en ciencias de la salud	62
8	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	61
9	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de Información	57
10	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	56
11	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	55
12	Servicios generales	41
13	Otros servicios de gestión y apoyo	41
14	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	38
15	Publicidad y propaganda	35
16	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	33
17	Impresión, encuadernación y otros	31
18	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	30
19	Equipo de comunicación	29
20	Información	29
21	Herramientas e instrumentos	27
22	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	23
23	Maquinaria y equipo para la producción	20
24	Repuestos y accesorios	20
25	Equipo y mobiliario de oficina	19
26	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	19
27	Equipo de cómputo	18
28	Productos veterinarios	18
29	Textiles y vestuario	17
30	Productos de papel, cartón e impresos	17
31	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	16
32	Servicios en ciencias económicas y sociales	16
33	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	15
34	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	14
35	Materia prima	14
36	Alimentos para animales	14
37	Otros productos químicos y conexos	13
38	Productos agroforestales	12
39	Útiles y materiales de limpieza	12
40	Servicios de ingeniería y arquitectura	12
41	Servicios informáticos	11
42	Semovientes	8
43	Productos farmacéuticos y medicinales	5
44	Madera y sus derivados	4
<b>Total de procedimientos de contratación</b>		<b>1.966</b>

Fuente: Elaborado por la Auditoría Universitaria, con base en datos del SIAC de la CGR y del SICOP.



### ANEXO 3

Subpartidas presupuestarias presentes, al menos, en tres de los cuatro años, en las que se clasifican el 97,0% de los procedimientos de contratación realizados por la UTN, 2019-2022

N.	Subpartida	Cantidad de procedimientos de contratación relacionados con la subpartida	Cantidad de años en que se encuentra presente la subpartida
1	Actividades protocolarias y sociales	235	4
2	Bienes intangibles	207	4
3	Actividades de capacitación	192	4
4	Mantenimiento y reparación de otros equipos	144	4
5	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	113	4
6	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	113	4
7	Servicios en ciencias de la salud	62	4
8	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	61	4
9	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de Información	57	4
10	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	56	4
11	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	55	4
12	Servicios generales	41	4
13	Otros servicios de gestión y apoyo	41	4
14	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	38	4
15	Publicidad y propaganda	35	4
16	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	33	4
17	Alquiler de edificios, locales y terrenos	32	3
18	Impresión, encuadernación y otros	31	4
19	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	30	4
20	Equipo de comunicación	29	4
21	Información	29	4
22	Herramientas e instrumentos	27	4
23	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	23	4
24	Maquinaria y equipo para la producción	20	4
25	Repuestos y accesorios	20	4
26	Equipo y mobiliario de oficina	19	4
27	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	19	4
28	Equipo de cómputo	18	4
29	Productos veterinarios	18	4
30	Textiles y vestuario	17	4
31	Productos de papel, cartón e impresos	17	4
32	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	16	4
33	Servicios en ciencias económicas y sociales	16	4
34	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	15	4
35	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	14	4
36	Materia prima	14	4
37	Alimentos para animales	14	4
38	Otros productos químicos y conexos	13	4
39	Productos agroforestales	12	4
40	Útiles y materiales de limpieza	12	4
41	Servicios de ingeniería y arquitectura	12	4

42	Otros útiles, materiales y suministros diversos	12	3
43	Servicios informáticos	11	4
44	Otros bienes para la producción y comercialización	9	3
45	Semovientes	8	4
46	Servicios de tecnologías de información	8	3
47	Tintas, pinturas y diluyentes	6	3
48	Productos farmacéuticos y medicinales	5	4
49	Alimentos y bebidas	5	3
50	Otras construcciones, adiciones y mejoras	5	3
51	Madera y sus derivados	4	4
52	Instalaciones	4	3
<b>Total de procedimientos de contratación</b>		<b>2.047</b>	

Fuente: Elaborado por la Auditoría Universitaria, con base en datos del SIAC de la CGR y del SICOP.